

ÍNDICE DE TRANSFORMACIÓN 2018 TENDENCIAS GLOBALES



Traducción: Eric Grosembacher - Diagramación y corrección: Hernán Alberro - Edición: Gabriel C. Salvia

| Bertelsmann **Stiftung**



Democracias en consolidación



Democracias defectuosas



Democracias altamente defectuosas



Autocracias moderadas



Autocracias duras



estados fallidos

Transformaciones políticas

Cada vez más gente vive en sociedades no libres

Las políticas antiliberales y antidemocráticas están ganando terreno en los países en desarrollo y en transformación. En comparación con hace dos años, las libertades de reunión y expresión, la separación de poderes y los derechos civiles están siendo cada vez más negados o limitados, y las elecciones menos equitativas. Particularmente en países de alta población la democracia está bajo presión.

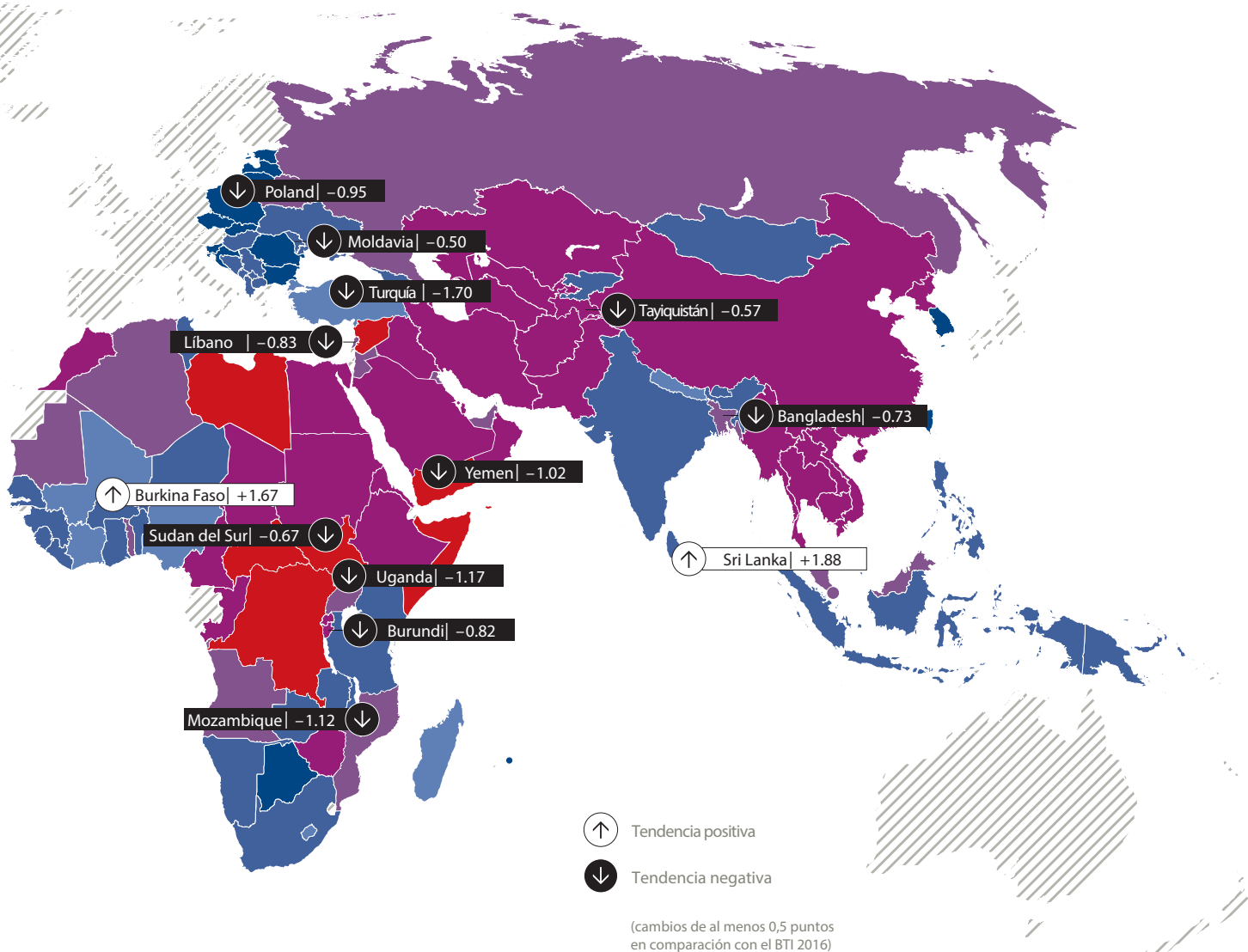
En la política, el período comprendido entre febrero de 2015 y enero de 2017 fue especialmente agitado. Europa se convirtió en uno de los principales destinos del mayor flujo migratorio desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Las guerras civiles y de poder en el Medio Oriente y el Norte de África continuaron ejerciendo su fuerza destructiva. Y aunque el llamado Estado Islámico se vio apartado de gran parte de su “califato”, ni la estabilidad ni el estado de los derechos humanos en la región han mejorado apreciablemente. El gobierno de Myanmar tomó medidas cautelosas para abrir un país marcado por tres décadas de dictadura militar y, al mismo tiempo, la violencia étnica y religiosa contra los rohingyas aumentó. Filipinos y polacos votaron

gobiernos autoritarios populistas. Los parlamentos en Brasil y Corea del Sur despojaron con éxito a los presidentes de sus países: Dilma Rousseff debido a infracciones de la ley y Park Geun-hye debido a la corrupción.

Las cifras del BTI 2018 indican que estos son más que simples eventos individuales no relacionados. La democracia se ha visto sometida a una mayor presión en todas las regiones del mundo, y el giro positivo dado por Corea del Sur tras el final del período de revisión del BTI sigue siendo una rareza entre los países que han lidiado con una crisis democrática. El número de autocracias ha aumentado ligeramente, y en las democracias restantes, la insatisfacción pública con la marcha de las cosas se ha extendido. En una cuarta

parte de los países encuestados (32 de 129), la aceptación de las instituciones democráticas por los actores políticos relevantes se ha erosionado. Desde 2015, aproximadamente una quinta parte de los gobiernos ha reducido aún más la libertad y la imparcialidad de las elecciones (28), han impuesto mayores restricciones a las libertades de asociación y reunión (27), han hecho más para comprometer la separación de poderes (24) o han reducido la libertad de expresión y las libertades de prensa (24). Las tendencias negativas con respecto a la participación política, el estado de derecho, la estabilidad de las instituciones democráticas y





su integración política y social son más pronunciadas en África oriental, Europa central y oriental, América Central y, una vez más, en Oriente Medio. Las pequeñas tendencias al alza registradas en África occidental, Asia meridional y los Estados bálticos compensan solo una fracción de esta tendencia negativa. De hecho, 13 países -de Bangladesh a Yemen- han registrado pérdidas significativas en términos de transformación política, con mejoras de grado comparable evidentes en solo dos países.

Burkina Faso y Sri Lanka son los dos puntos brillantes en la edición actual del BTI. Ambos países pueden basarse en experiencias democráticas previas que progresivamente dieron paso a

estilos de gobierno autoritario bajo los presidentes Blaise Compaoré en Burkina Faso y Marinda Rajapaksa en Sri Lanka. En cada caso, las estructuras autoritarias se habían solidificado recientemente, con el quinto mandato inacabado de Compaoré (2010-2014) y el segundo mandato de Rajapaksa (2010-2014). El final del período de ambas figuras llegó inesperadamente; en Burkina Faso, las protestas masivas sacaron a Compaoré de su cargo en 2014 después de 27 años, mientras que en Sri Lanka, Rajapaksa sufrió una derrota sorpresiva en las urnas a manos de la oposición después de 10 años en el gobierno. En ambos países, los gobiernos recién elegidos han ocupado el cargo desde 2015 y han tomado

medidas importantes para restablecer la democracia y el estado de derecho. Sin embargo, los dos países aún tienen un largo camino por recorrer en términos de consolidación de sus sistemas democráticos.

A pesar de un mínimo histórico para la mejora democrática, Burkina Faso y Sri Lanka siguen siendo los únicos países que muestran un progreso significativo (al menos medio punto) en la transformación política durante el período de revisión. Esto es menor que en cualquier otro momento en los últimos 10 años. Este número bajo evocaría menos preocupación si no fuera por el hecho de que el número de aquellos que registraron el deterioro ha crecido en la manera que lo hizo.

De hecho, 13 países -un 10% de la muestra de todo el BTI- mostraron un retroceso significativo entre febrero de 2015 y enero de 2017.

Una mirada más cercana a los 15 países que muestran los mayores cambios con respecto a la transformación política desde el BTI 2016 revela rápidamente cuán diferentes son los casos. Por ejemplo, el proceso fallido de formación de Estado en Sudán del Sur tiene poco en común con el endurecimiento de la autocracia fortificada de Tayikistán, y la abolición de un estado de derecho ya frágil en Mozambique solo es superficialmente comparable con la continua desestabilización de la democracia establecida en Polonia. Por lo tanto, los países deben clasificarse en ocho grupos, cada uno de los cuales refleja una tendencia negativa o positiva en cada etapa de desarrollo en una transformación democrática gradual: falla del Estado versus construcción del Estado; endurecimiento autocrático versus apertura autocrática; resurgimiento autocrático versus democratización; y reincidencia democrática versus revitalización democrática. Los países que muestran un cambio numérico de al menos $\pm 0,50$ puntos se asignan a los ocho grupos en función de los siguientes criterios: los países con un puntaje de estatalidad inferior a 3,0 puntos se colocan en el grupo "creación del Estado" si muestran mejoras o en el grupo "falla del Estado" en el caso de deterioros. El endurecimiento y la apertura de las autocracias se clasifican por definición como autocracias tanto al comienzo como al final del período de revisión actual. Los países en los que un cambio de régimen implicó un cambio de la autocracia a la democracia se identifican aquí como democratizados; resurgimiento autocrático describe el caso inverso. La revitalización democrática y la reincidencia democrática ocurren solo en países que fueron clasificados como democracias en las encuestas de 2016 y 2018.

Paralelamente, aplicamos la misma tipología al considerar desarrollos más duraderos durante todo el período cubierto por el BTI. Para las tendencias designadas aquí como de mediano plazo, el período de revisión se extiende desde el BTI 2006 (con una fecha de referencia del 31 de enero de 2005) hasta el BTI 2018 (fecha de referencia del 31 de enero de 2017). Para distinguir las tendencias fuertes de las menos fuertes, el umbral de significación para estas tendencias a mediano plazo se eleva de 0,50 a 1,00 puntos. Sin duda, los límites entre las ocho categorías son fluidos, y la asignación de países a ciertos grupos depende del período de comparación específico.

Estados fallidos

El primer par de contrastes -construcción del Estado y falla del Estado- se centra en el núcleo de sistemas políticos estables: el monopolio estatal sobre el uso de la fuerza y la presencia de estructuras administrativas básicas. Sudán del Sur y Yemen, dos de los 13 países que perdieron terreno en el BTI 2018, entran en esta categoría. Aquí, la extinción de los últimos vestigios de estructuras democráticas y estatales ha sido una consecuencia directa de la destrucción integral de las instituciones fundamentales, que ha eliminado de base cualquier forma de gobierno político, y mucho menos el ejercicio de la soberanía popular. En Yemen, una guerra civil se ha convertido rápidamente en una guerra de poder entre las fuerzas de Arabia Saudita y las fuerzas pro iraníes que crearon una catástrofe humanitaria. El fracaso del Estado en Sudán del Sur, un país también plagado de guerras civiles, tiene causas principalmente domésticas. El conflicto de élite que se intensificó a fines de 2013 adquirió una dimensión étnica en tan solo 24 horas, con soldados de Dinka atacando a soldados en Nuer y civiles en Juba, la capital. En el mediano

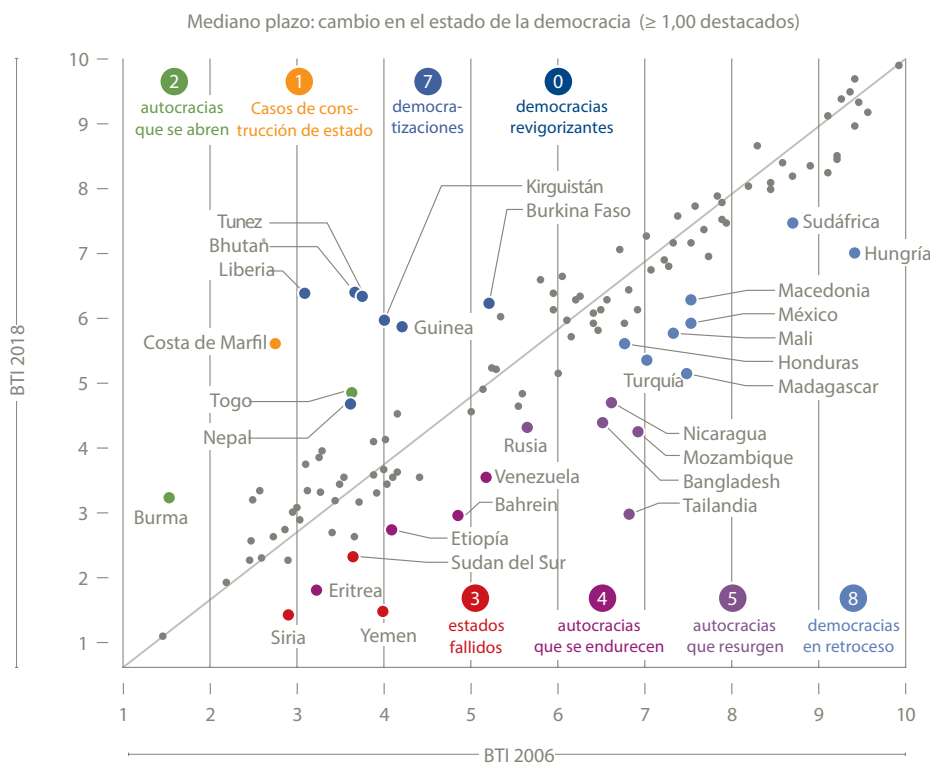
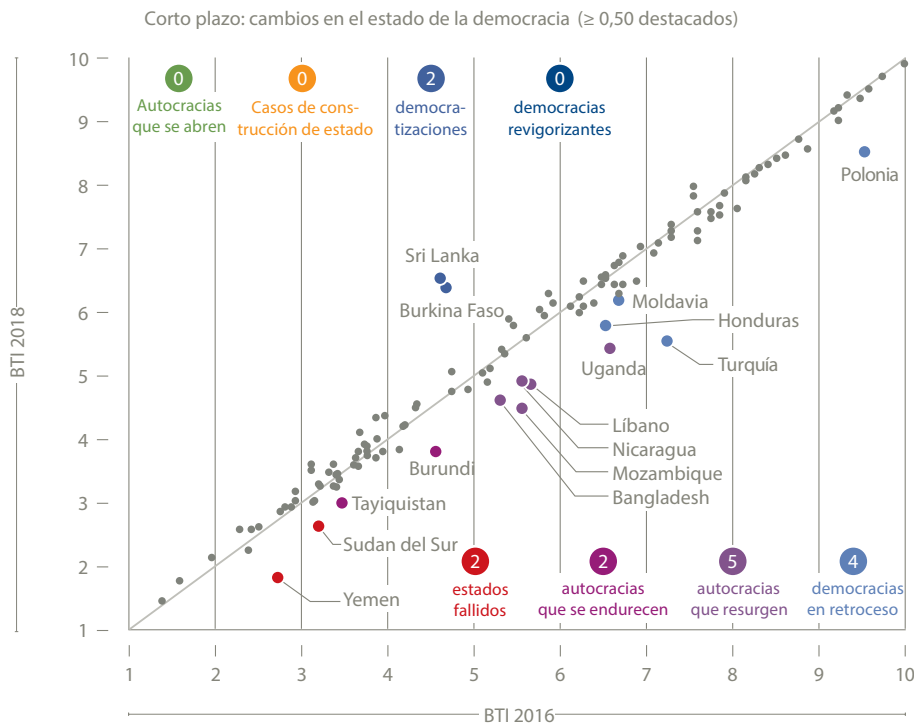
plazo, durante todo el período desde mediados de la década de 2000, Siria (-5.5) se une a estos dos países como ejemplos de una rápida falla del Estado. La extensión y la velocidad con que la guerra civil destruyó aquí la estructura del Estado en tan solo unos pocos años, con efectos dominó para toda la región, es única en la historia reciente. Según una estimación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 2015, el 80% de la población del país vivía en la pobreza, y la esperanza de vida había disminuido en 20 años desde 2011.

Por el contrario, a partir de una condición de fracaso estatal (en el BTI 2006 y BTI 2008), Costa de Marfil ha logrado avanzar fuertemente hacia la democracia que ha incluido la reconstrucción de las capacidades estatales básicas (+4.5). Costa de Marfil es también el único país en el BTI una vez catalogado como un Estado fallido que hoy cuenta como una democracia. Es un desarrollo notable, incluso si la base institucional para la democracia en el Estado de África Occidental sigue siendo frágil.

Endurecimiento de las autocracias

Dentro del segundo par de contrastes -autocracias tendientes a la apertura y el endurecimiento de las autocracias- Burundi y Tayikistán son otros dos de los 13 países que han perdido terreno en términos de transformación política en el BTI 2018. Burundi se encuentra en una profunda crisis política y económica desencadenada por la exitosa oferta del presidente Pierre Nkurunziza de un tercer mandato constitucionalmente prohibido en el cargo.

Por el momento, el gobierno ha conservado la delantera después de moverse con una fuerza brutal contra los disidentes. Sin embargo, las protestas masivas y un intento de golpe militar en 2015 revelaron desavenencias entre grupos étnicos



* Bhutan fue evaluado por primera vez en 2008, Sudan del Sur en 2012.

y la presencia de facciones rivales dentro de los órganos de seguridad. En Tayikistán, la supresión de la oposición y grupos de la sociedad civil independientes ha sido el precio pagado por un monopolio estatal más fuerte sobre el uso de la fuerza (9.0).

La consolidación de la estatalidad central aquí (+4.0 desde el BTI 2006)

ha tenido lugar en paralelo con una erosión en el estado de derecho (-1.5) y la reducción de las oportunidades de participación política restantes (-1.0).

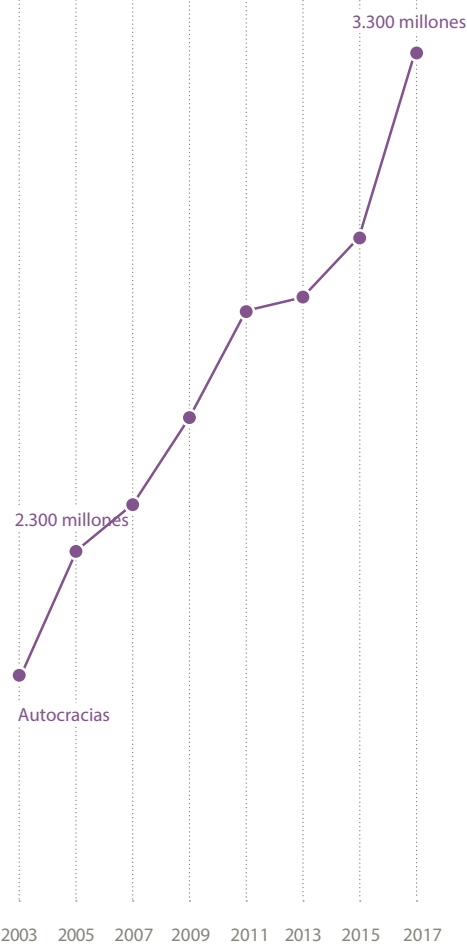
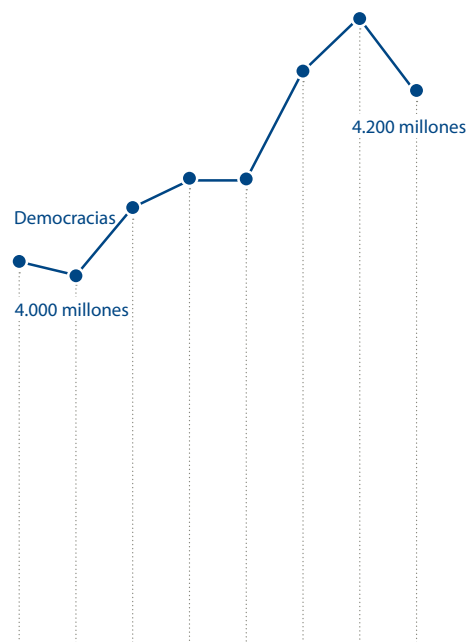
En la perspectiva de mediano plazo, desde mediados de la década de 2000, cuatro autocracias, Bahréin, Eritrea, Etiopía y Venezuela, se han endurecido significativamente. De

hecho, los gobiernos en cada uno de estos Estados han reaccionado cada vez más con represión a las protestas de amplia base que han surgido entre sus públicos. Después de que la coalición gobernante de Etiopía ganara los 547 escaños parlamentarios en la manipulada elección de 2015, los ciudadanos de la región administrativa más grande, Oromia, se reunieron para protestar. El gobierno de Etiopía impuso el estado de emergencia y habilitó a las fuerzas de seguridad para ejercer un poder draconiano y de largo alcance en todo el país, lo que condujo a una restricción de las libertades políticas. Tras una amplia revuelta en 2011, Bahréin se convirtió en un Estado policial que actúa con rigor contra disidentes, defensores de los derechos humanos, clérigos, manifestantes y fuerzas de la oposición. Al-Wefaq, el mayor partido de la oposición, que también representa la corriente principal de la mayoría chiíta de Bahréin, fue proscrito y su secretario general, Ali Salman, fue sentenciado a nueve años de prisión por promover la desobediencia. En Venezuela, no solo se han realizado manifestaciones masivas en las calles contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro en los últimos años, sino que la oposición también ganó las elecciones parlamentarias de 2015 con una mayoría de dos tercios. El jefe de estado luego impuso un estado de emergencia que expandió sus poderes, y finalmente abolió la separación de poderes ya fuertemente erosionada.

Para un gran número de jóvenes eritreos, abandonar el Estado policial que se desmorona económicamente parece ser la única opción para protestar contra las políticas del régimen y para luchar por una vida decente a pesar de los peligros en el camino hacia sus destinos previstos.

Estas cuatro autocracias rígidamente endurecidas contrastan con dos autocracias, Myanmar y Togo, que han mostrado fuertes tendencias de apertura a mediano plazo.

Más gente que nunca crece en sociedades no libres



Población mundial según el régimen político del país. Los países de la OECD son considerados democracias. Fuentes: BTI, World Bank.

Sin embargo, estas no son instancias ejemplares. En ambos países, los peligros para la paz y la democracia han aumentado recientemente. Myanmar fue tal vez el caso de transformación “novedoso”

más emocionante de los últimos años pero, al mismo tiempo, una de las grandes decepciones en el actual período de revisión del BTI. Los militares habían despejado el camino para elecciones libres y, por lo tanto, renunciaron a una parte de su poder; sin embargo, han surgido noticias de pogromos contra el grupo étnico rohingya en la provincia de Rakhine. En Togo, el historial de derechos humanos del gobierno ha mejorado, pero sigue siendo decepcionante. Debido a la aparente determinación del presidente Faure Gnassingbé de retener el poder por un tercer y posiblemente cuarto mandato en el cargo, cualquiera sea el costo, el clima político sigue siendo tenso.

Autocracias resurgentes

El tercer par de contrastes, el resurgimiento autocrático y la democratización, es el grupo más representado entre los países que muestran cambios significativos en los puntajes de transformación política. Estos se refieren a los cambios asociados con un cambio de régimen entre la democracia y la autocracia. Cinco de los 13 países que perdieron terreno en términos de transformación política en el BTI 2018, incluidos Bangladesh, Líbano, Mozambique, Nicaragua y Uganda, son renacientes autocracias. Aquí identificamos tres patrones: primero, ninguno de estos países se clasificó previamente como democracia frágil o fuertemente defectuosa, sino que más bien se consideraron democracias defectuosas relativamente estables que no se habían clasificado como autocracias en ninguna de las últimas cinco evaluaciones (BTI 2008 - 2016). Segundo, en cuatro de los cinco casos (la única excepción es Mozambique), el resurgimiento autocrático se ha relacionado inextricablemente con la manipulación de procesos electorales libres y justos que ya no cumplen con los estándares democráticos mínimos. Y tercero, los gobiernos en los cinco países han socavado el estado de

derecho.

Bangladesh, donde los déficits democráticos del país han empeorado apreciablemente, demuestra claramente este patrón. Si bien no se han llevado a cabo elecciones importantes en Bangladesh durante este siglo, raramente han sido tan violentas como en el caso de las elecciones locales a los consejos sindicales en 2015 y 2016, ambas acompañadas de acusaciones de manipulación. Decenas de personas fueron víctimas de los ataques de islamistas opositores. Desde el boicot de la oposición a las elecciones parlamentarias de 2014, en las que la Liga Awami que gobierna ganó más de la mitad de los escaños sin enfrentarse a candidatos rivales, la legislatura ha actuado como un brazo extendido del ejecutivo. Un cambio en la ley ha permitido en algunos casos que el parlamento elimine a los jueces de mayor rango por “mala conducta” o “incapacidad”.

El resurgimiento autocrático en Bangladesh, anteriormente la sexta mayor democracia en el mundo después de India, Estados Unidos, Indonesia, Brasil y Nigeria, ha tenido consecuencias palpables para la relación global entre las democracias y las autocracias. De hecho, este solo factor explica una disminución del 2.2% en la porción de la población mundial gobernada democráticamente. El resurgimiento autocrático de Uganda, Mozambique, Nicaragua y el Líbano, que juntos constituyen otro 1,1% de la población mundial, también ha contribuido al declive de la democracia durante el período de revisión. Por el contrario, las dos nuevas democracias relativamente pequeñas de Burkina Faso y Sri Lanka (juntas, 0,5%) hacen poco para contrarrestar esta tendencia. En consecuencia, la porción de la población mundial gobernada democráticamente disminuyó del 59.3% al 56.5% entre 2015 y 2017. Por primera vez, más de 3,000 millones de personas se gobiernan de manera autocrática, con una fuerte

tendencia al alza. Significativamente más personas aún están gobernadas democráticamente, pero el número absoluto ha aumentado sólo ligeramente en los últimos años, e incluso ha disminuido ligeramente en el período de revisión actual.

La proporción global de personas sujetas a regímenes cada vez más autocráticos también ha aumentado en el mediano plazo, es decir, desde mediados de la década de 2000. Sin duda, hay más democratizaciones (Bhután, Burkina Faso, Guinea, Kirguistán, Liberia, Nepal y Túnez) que las renacientes autocracias (Bangladesh, Mozambique, Nicaragua, Rusia y Tailandia) entre los países que muestran fuertes cambios de transformación política de al menos un punto completo durante este período de tiempo. Pero las cinco autocracias resurgentes juntas tienen cinco veces más residentes que las siete nuevas democracias. Eso significa que más y más personas están creciendo en sociedades no libres.

Democracias reincidentes

Además de lo anterior, hay ciertos desarrollos en las democracias que todavía tienen que marcar el comienzo de un cambio de régimen que son motivo de preocupación.

De hecho, en ninguno de los cuatro pares de grupos contrastantes, la discrepancia entre las tendencias claramente positivas y negativas es mayor que en el par final: la revitalización democrática y el retroceso democrático. Ninguna democracia existente ha progresado significativamente en términos de profundización de la democracia en el BTI 2018. Sin embargo, cuatro democracias (Honduras, Moldavia, Polonia y Turquía) han visto reducciones significativas en la calidad. En este grupo heterogéneo hay varios paralelos; los gobiernos centrales en los cuatro países han reducido enormemente la separación de poderes, teniendo como objetivo particular la independencia del

sistema de justicia. Los legisladores también han socavado la libertad de expresión y de prensa al no demostrar su determinación en procesar a los responsables del asesinato de periodistas (Honduras), permitiendo que las estructuras de propiedad de los medios se vuelvan cada vez más oligárquicas (Moldavia), que intereses partidistas determinen quién se sienta el consejo nacional de radiodifusión del sistema de medios públicos (Polonia) y hostigando a los medios de comunicación que expresan críticas al gobierno, llegando incluso a cerrar empresas de medios enteras (Turquía). Estos países comparten el objetivo más o menos declarado de perpetuar una concepción antiliberal de la democracia mucho más allá del período actual del gobierno. Entre las cuatro democracias que mostraron retrocesos en el período de revisión que finalizó el 31 de enero de 2017, Honduras y Turquía se han alejado más de los principios democráticos básicos y, por lo tanto, ya se encuentran cerca del umbral de la autocracia. Ni el controvertido referéndum celebrado en abril de 2017 en Turquía, en el que una estrecha mayoría votó para ampliar los poderes del presidente Recep Tayyip Erdoğan, ni el dudoso proceso de elección presidencial en Honduras en noviembre de 2017 podrían tomarse en cuenta aquí. Honduras y Turquía también figuran entre las democracias que muestran las tendencias negativas más fuertes en todo el período de la encuesta del BTI desde mediados de la década de 2000.

Seis países adicionales -Hungría, Macedonia, Madagascar, Malí, México y Sudáfrica- también han experimentado fuertes reveses democráticos en este período. Madagascar y Mali caen algo fuera de este grupo; si bien fueron clasificadas de facto como democracias al comienzo y al final del período de revisión de mediano plazo, cada una de ellas sufrió dos cambios de régimen entre tanto, hacia la

autocracia y de vuelta a la democracia. Sin embargo, el patrón en las ocho democracias que muestran retrocesos a mediano plazo es muy similar al de las democracias en declive del período actual: primero, los derechos civiles se violan con mayor fuerza en todos los ámbitos. En segundo lugar, la separación de poderes ha sido ampliamente restringida en todos los países del grupo. En tercer lugar, con la excepción de Honduras y Sudáfrica, la influencia de los dogmas religiosos sobre el orden legal y las instituciones políticas ha aumentado, incluso en Estados marcadamente seculares.

En cuarto lugar, los ciudadanos críticos con el régimen ya no pueden ejercer el derecho de reunión y los derechos a la libre expresión y la presentación de informes independientes en la medida de lo posible hace 12 años. Quinto, la competencia política en las urnas ya no es tan justa como hace algunos años. Y sexto, los actores políticos relevantes -incluidas agencias gubernamentales, partidos políticos, asociaciones, grupos de interés, organizaciones cívicas, militares y/o clérigos -según el país- están cada vez menos comprometidos con las instituciones democráticas.

Derechos y libertades bajo presión

Sin embargo, los reveses democráticos en estas seis áreas no son en absoluto observables solo en los países con pronunciadas tendencias negativas. Han tenido lugar tanto en democracias como en autocracias, e incluso en países que no se considera que hayan tomado un giro populista-autoritario o que hayan sufrido un endurecimiento autocrático.

El desarrollo afecta a todos los tipos de regímenes, regiones y niveles de desarrollo socioeconómico, y en términos generales también incluye las democracias consolidadas occidentales y las economías de mercado que el BTI no estudia.

En muchos países en desarrollo y en transformación, los derechos civiles están menos protegidos que a comienzos de 2005, la separación de poderes funciona peor, la influencia de los dogmas religiosos sobre los órdenes legales y las instituciones políticas ha crecido, se otorgan menos libertades políticas, las elecciones son ya no tan libres y justas, y el compromiso de los actores políticos relevantes con las instituciones

democráticas ha disminuido. Sin duda, estas tendencias negativas se han estabilizado un poco durante el actual período de revisión, pero no se vislumbra una reversión de la tendencia. Por el contrario, la brecha relativa al estándar de democracia alcanzada en el primer punto de evaluación a mediados de la década de los 2000 sigue siendo grande, y en la mayoría de las áreas se ha ampliado aún más. Pero, ¿cuáles son

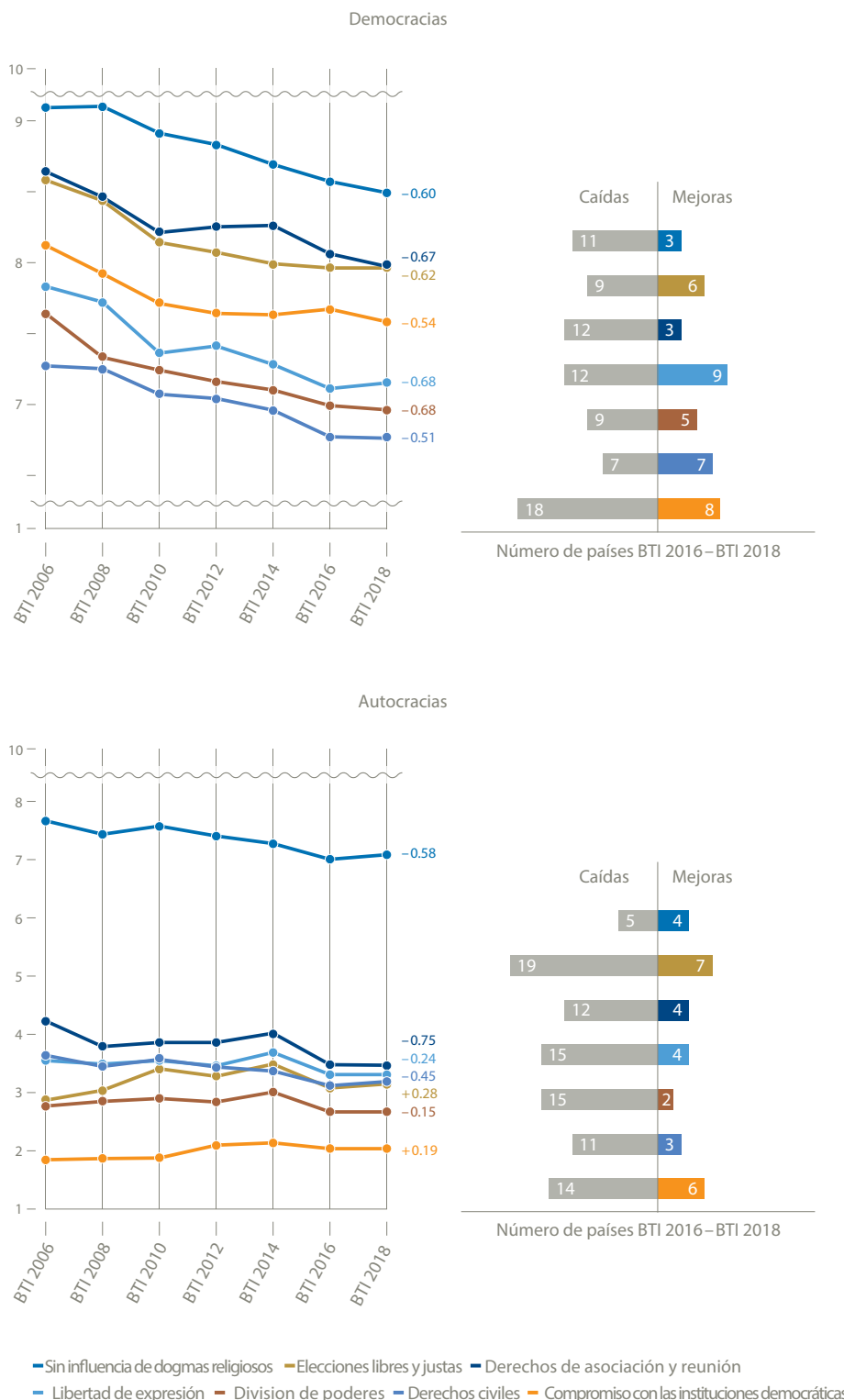
exactamente los factores que impulsan estos desarrollos?

La eficacia de las protecciones de los derechos civiles, es decir, de las libertades personales en relación con los actores estatales y no estatales, así como la igualdad ante la ley, ha estado erosionando durante bastante tiempo, una tendencia que ha continuado en el BTI 2018. Las autocracias han socavado los derechos civiles más que las democracias. Los derechos se han restringido más significativamente en Bahréin, Mozambique, Tailandia y Yemen (-4.0 puntos en relación con el BTI 2006).

Los controles y equilibrios entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial se han vuelto más disfuncionales en una serie de países, por lo general cambiando para permitir un ejecutivo más fuerte. Este desarrollo ha afectado democracias y autocracias en igual medida. La democracia ahora defectuosa de Hungría (-5.0), la autocracia moderada de Bangladesh (-4.0) y la autocracia de línea dura de Tailandia (-4.0) han sido las más afectadas por esta tendencia.

Previos informes del BTI han demostrado el impacto que el dogma religioso puede tener en la desestabilización de las instituciones estatales y órdenes legales. Esta tendencia ha ganado recientemente una mayor tracción. La clasificación de los dos países más afectados aquí -Etiopía y Libia (ambos -4)- como autocracias de línea dura no puede ocultar el hecho de que explotar la religión como una ideología política representa un problema igualmente problemático en los países democráticos. Ciertas interpretaciones del Islam que son incompatibles con la democracia han adquirido una influencia significativa en países tan diversos como Indonesia, Nigeria, Senegal y Turquía. Sin embargo, los partidarios de otras religiones también pueden jugar un papel activo en la subversión del estado de derecho, como lo demuestran las fuerzas nacionalistas

Derechos políticos y civiles cada vez más restringidos



hindúes dentro del gobierno de BJP en India, la Asociación Patriótica Budista ultranacionalista de Myanmar y la Iglesia Ortodoxa en Rusia, que ha entrado en una relación simbiótica con el régimen de Vladimir Putin. Los derechos para asociarse, reunirse, elevar la voz y acceder a medios independientes se han restringido con una frecuencia particular. En ninguna autocracia, la represión de estos derechos aumentó con más fuerza que en la joven dictadura militar de Tailandia (-4.5), y en ninguna democracia como en Madagascar (-4.0).

Competencia desleal en las urnas

La manipulación electoral siempre ha sido parte del conjunto de herramientas de la política de poder semi autoritaria y autocrática. Por un lado, sigue siendo cierto que casi ningún gobierno en el mundo puede o quiere renunciar a la mayor fuente de legitimidad política: el voto de los ciudadanos. Estas son buenas noticias para la aceptación y el atractivo del principio de la soberanía popular. Por otro lado, los actores políticos están explotando las oportunidades para manipular la opinión pública en su propio beneficio con una sutileza y eficiencia cada vez mayores, perjudicando o pervirtiendo así la reputación y la capacidad de funcionar de la democracia.

En el período de revisión actual, la libertad y la equidad de las elecciones también se ha deteriorado. Más de la mitad de los países encuestados (66 de 129) celebraron elecciones nacionales ejecutivas y/o legislativas entre el 1 de febrero de 2015 y el 31 de enero de 2017. En un total de 35 casos, la calidad de la votación fue tan buena o mala como en la anterior elección; sin embargo, los niveles de calidad cambiaron en 31 elecciones, con deterioros que superaron las mejoras. En 13 casos, las elecciones se llevaron a cabo de una manera más libre y más justa,

con los avances más impresionantes mostrados por Burkina Faso, la República Centroafricana y Myanmar. Sin embargo, en 18 casos, las votaciones fueron menos libres y justas, y la calidad de las elecciones disminuyó significativamente en Burundi, Níger, Venezuela y Zambia. Este récord negativo se amplifica considerablemente por el hecho de que en 10 países adicionales en los que no se celebraron elecciones se ha cambiado la fecha de las próximas elecciones ordenadas por la Constitución o se ha interferido con procesos independientes de supervisión electoral en su propio beneficio. Estas intervenciones van desde la reducción de la independencia de la comisión electoral (Madagascar) y la abolición de los límites de mandato (Honduras) hasta los múltiples aplazamientos de una elección presidencial, extendiendo así artificialmente el último mandato constitucional del gobierno (RD Congo). En total, ha habido más del doble de deterioros (28) que mejoras (13).

Manipulación de la sociedad civil

Los modelos populistas-autoritarios que postulan una alternativa al orden democrático están invadiendo profundamente a la sociedad civil, y los críticos de la democracia liberal se han vuelto cada vez más eficientes explotando las estructuras democráticas para su propósito, desestabilizando los sistemas políticos desde adentro, un hecho claramente visto en sociedades civiles bien organizadas que también están fuertemente polarizadas. La fuerza relativa de una sociedad civil no permite deducir linealmente su efecto sobre la calidad de la democracia en la que opera. A esto se agrega un problema adicional, el de la manipulación estatal de la sociedad civil, que da como resultado el fenómeno del “espacio reducido”. Si bien en la mayoría de los casos

vemos el acoso estatal reduciendo las oportunidades genuinas de participación en la sociedad civil, también vemos con mayor frecuencia casos de intervención estatal en apoyo de ciertos grupos de la sociedad civil. Por lo tanto, “el espacio manipulado” refleja el estado de la sociedad civil en muchos países. Ambos mecanismos, represión y manipulación, se abordan a continuación.

Los medios de interferencia, marginación y aislamiento son notablemente similares. Numerosos gobiernos -autócratas y democráticos por igual- han buscado calificar a los actores de la sociedad civil como agentes extranjeros. Vemos que los gobiernos adoptan cada vez más procedimientos burocráticos nuevos que apuntan a obstruir sistemáticamente la actividad del tercer sector. Al mismo tiempo, han surgido organizaciones respaldadas por el Estado para competir con aquellos actores que no están alineados y que son críticos con sus acciones.

Cualquier sociedad civil sujeta a tales restricciones y manipulación inevitablemente generará una representación distorsionada de los intereses reales de una población. Los informes de los medios controlados por el Estado exacerban esta dinámica, minando así la capacidad de una sociedad para alcanzar un consenso democrático. En tales casos, el aparato estatal se ha centrado principalmente en socavar la independencia de las organizaciones autofinanciadas y autogestionadas que son críticas con el gobierno y que pueden recurrir a recursos privados para actuar en todas las áreas clave de política. En general, los métodos utilizados por los líderes son muy similares. Un clásico entre las iniciativas legislativas destinadas a reducir la sociedad civil son la criminalización de ONG extranjeras o incluso parcialmente financiadas con fondos extranjeros. Las democracias dirigidas y los regímenes autocráticos se han dirigido a estas organizaciones

en particular porque el apoyo que reciben de fuentes extranjeras les proporciona cierta independencia de las limitaciones de una sociedad civil políticamente controlada. También vale la pena señalar que no son solo países como China y Rusia los que tienden a dificultar que los donantes externos apoyen a las ONG nacionales, aislándolas así.

Etiopía prohíbe a las organizaciones extranjeras sin fines de lucro participar en la presentación de informes o la representación de los derechos humanos. El gobierno sudanés limita las actividades de los grupos, en particular las organizaciones de derechos humanos, que tienen contactos o reciben apoyo financiero de las ONG occidentales. En 2016, el parlamento de Bangladesh aprobó una ley que permite a las actividades antiestatales y al financiamiento del terrorismo, en la práctica, usarse contra las ONG críticas al régimen que han recibido financiamiento extranjero. Laos también ha emitido nuevas regulaciones más estrictas que cubren las actividades de las ONG internacionales. Las democracias también han participado en tales restricciones; por ejemplo, el gobierno de la India ha seguido negando a las ONG el acceso a recursos de financiación extranjeros en virtud de su Ley de Regulación de las Contribuciones Extranjeras y, desde 2016, se ha negado a renovar las licencias de financiación extranjera para 25 ONG.

Acoso, burocracia y campañas de desprestigio

Además de agotar las fuentes de financiación extranjeras, los incentivos para que las ONG exhiban un comportamiento leal al régimen son un medio de intervención probado y verdadero. En China, una ley sin fines de lucro aprobada en 2016 permite a las ONG recaudar fondos, incluso de fuentes nacionales, solo si el gobierno ha dado su

autorización expresa. El gobierno ecuatoriano acosa a organizaciones como CONALIE, una asociación que agrupa a la mayoría de los pueblos indígenas del país, disminuyendo así su influencia política. En Hungría, las organizaciones leales y cuasi gubernamentales (QUANGO) son, en la práctica, las únicas que tienen acceso a recursos financieros estatales. Recientemente, Polonia adoptó una ley que contempla la centralización de las asignaciones de subvenciones, incluso las derivadas de los recursos de la UE, en un instituto de reciente creación directamente subordinado al primer ministro.

Otro medio de interferencia estatal con las organizaciones de la sociedad civil involucra el uso de presión política en el reclutamiento de posiciones de liderazgo en el tercer sector, incluso para aquellos grupos que no están específicamente alineados o cumpliendo con el Estado, y no han sido fundados por personas aliadas al gobierno. En Camboya, el clima para las organizaciones de la sociedad civil (OSC) ha empeorado significativamente. Las autoridades de Burundi prohibieron 10 grandes organizaciones de la sociedad civil en 2016.

En Turquía, ha habido numerosos intentos de influencia estatal directa o incluso el cierre de OSC y fundaciones. Varios Estados han adoptado o reforzado procedimientos burocráticos de registro que sirven para acosar y paralizar a la sociedad civil. En Afganistán, una nueva ley de ONG adoptada en 2015 introdujo tres niveles de registro en diferentes agencias gubernamentales, colocó áreas de financiación y actividad bajo supervisión estatal y prohibió actividades fuera de las pautas establecidas por el gobierno. También en Bolivia, donde 38 organizaciones fueron declaradas ilegales en 2015, las OSC se quejan de los complicados procedimientos de registro. Las OSC chinas deben encontrar una organización patrocinadora estatal y

luego someterse a un procedimiento exigente para completar el registro ante el Ministerio de Asuntos Civiles o sus sucursales locales.

Además, los gobiernos u organizaciones de medios ampliamente controlados por ellos lanzan campañas que difaman a las OSC como las marionetas del control externo comprometidas en la traición.

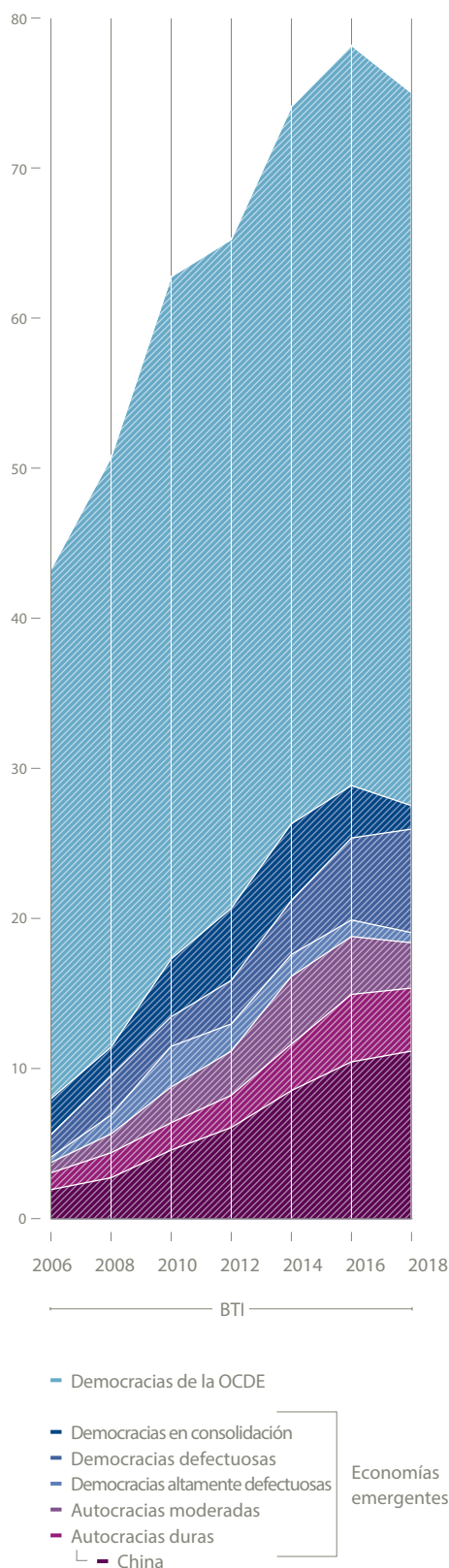
El ejemplo más conocido es la campaña publicitaria multimillonaria en dólares del gobierno húngaro contra George Soros, cuya ayuda filantrópica a los migrantes se describió como el equivalente al apoyo de organizaciones terroristas. Después de las elecciones de diciembre de 2016, el ex primer ministro macedonio Nikola Gruevski también pidió una “de-Sorosización” de Macedonia, y acusó a los actores críticos de la sociedad civil de ser comisionados por Soros para derrocar al gobierno.

Transferencia de estrategias de represión

Es obvio que las estrategias para limitar la actividad libre en la esfera política se aplican cada vez con mayor sutileza y eficiencia. Los autoritarios modernos gobiernan sus sociedades por ley y mediante el uso de medios y redes gestionadas. Los gobiernos dominan a los críticos con burocracia y acusaciones, los difaman como alborotadores controlados externamente y los cortan del apoyo financiero. Las eficaces estrategias de represión de este tipo pueden transferirse fácilmente de un país a otro. De hecho, la semejanza de la legislación antiliberal introducida en varios países es sorprendente. A la mezcla se agrega la incertidumbre que crean ofensas legales vagamente formuladas como “actividad política” o “medidas subversivas” para los opositores al régimen activo.

También está claro que quienes postulan modelos alternativos a la democracia liberal están ganando confianza. En un discurso de 2014

Las autocracias aumentan su poder económico frente a las democracias ricas



PBI (US\$ corrientes) por categoría de régimen. Miembros de la OCDE y China se presentan por separado. BTI 2018 (2/2015-1/2017) combinados con datos del PBI de 2016, BTI 2016 con datos de 2014, y así. Fuentes: BTI; World Bank.

que recibió considerable atención internacional, el primer ministro húngaro Viktor Orbán formuló agresivamente el objetivo de un “Estado antiliberal”, orientándose decididamente hacia las “estrellas” no occidentales como China, India, Rusia, Singapur y Turquía, la mayoría de los cuales el BTI clasifica como autocracias o, en el mejor de los casos, como democracias defectuosas. La oscura idea de una “democracia no liberal” también es muy apreciada por el presidente filipino Rodrigo Duterte, el político más poderoso de Polonia, Jarosław Kaczyński, el presidente ruso Putin y el presidente turco Erdoğan. Han pasado muchos años desde que un proyecto decididamente antidemocrático fue promovido tan pública y descaradamente. La promesa de que formas de gobernanza distintas de la democracia liberal podrían ayudar a los Estados nacionales a lograr una nueva importancia económica y cultural está creciendo entre los líderes políticos. La creciente admiración por los modernizadores autocráticos no es del todo sorprendente. De hecho, las autocracias, incluso más que las democracias emergentes, han podido aumentar drásticamente su peso relativo en la economía global en unos pocos años. Si bien la participación de la actividad económica mundial que generaron las autocracias fue del 9% en 2004, esta proporción aumentó al 25% en 2016. Y sin embargo, el aumento de las no democracias no es un hecho. En primer lugar, la participación de China en la creación de valor global supera a la de todas las demás autocracias reunidas. En otras palabras, el caso excepcional de China es, en cierto sentido, la hoja de parra de numerosas autocracias mal gobernadas que no son, en lo más mínimo, adecuadas como modelos alternativos. Si excluimos a China del cálculo, la participación acumulada de las autocracias en la economía global no ha aumentado desde el final

del boom de los recursos. Además, debe tenerse en cuenta que el ingreso per cápita de todos los pueblos gobernados democráticamente sigue siendo muy superior al de la porción de la población mundial gobernada de manera autocrática. La brecha se está cerrando lentamente. Las amenazas más graves para la democracia en los países en desarrollo y en transformación provienen de las democracias más antiguas y más estables entre ellos, incluso países que una vez fueron proclamados como “campeones” de la transformación, como Polonia.

Aparentemente, el discurso antiliberal agresivamente perseguido y la actividad gubernamental democráticamente dudosa han contribuido poco a disminuir la reputación de gobiernos populistas-autoritarios. Los votantes en Polonia y Hungría han reelegido a los populistas en múltiples ocasiones a pesar de la historia de transformación exitosa de sus países. En Filipinas, el presidente Duterte, que es responsable de cientos de asesinatos extrajudiciales en el curso de una campaña antidrogas, continúa disfrutando de una tasa de aprobación relativamente alta. El presidente de la India Narendra Modi, bajo el cual el discurso nacional se ha alejado de la idea de concebir como una nación secular hacia una definición del país como una sociedad de mayoría hindú, es inmensamente popular. En el pasado, las propias acciones de los populistas autoritarios han generado desencanto. Las sociedades actualmente afectadas por la erosión en la calidad de la democracia y el creciente apoyo a gobiernos autoritarios ahora enfrentan el desafío de romper los hechizos que tienen esas cabezas antes de que estos líderes remodelen los sistemas políticos en moldes autocráticos rusos o venezolanos, obstruyendo así el camino pacífico a la democracia.

Transformación política, BTI 2018

Democracias en consolidación

Puntaje 10 a 8

19

Uruguay	9.95
Estonia	9.75
Taiwan	9.55
Lituania	9.45
Rep. Checa	9.40
Eslovenia	9.25
Chile	9.20
Costa Rica	9.05
Letonia	8.75
Eslovaquia	8.60
Polonia	8.55
Mauricio	8.50
Corea del Sur	8.45
Croacia	8.35
Jamaica	8.30
Botswana	8.20
Rumania	8.15
Bulgaria	8.10
Argentina ▲	8.00

Democracias defectuosas

Puntaje < 8 a 6

42

Ghana	7.90
Benin	7.85
Serbia	7.70
Brasil ▼	7.65
India	7.60
Sudáfrica	7.60
Montenegro	7.55
Namibia	7.50
Mongolia	7.40
El Salvador	7.30
Panamá	7.30
Bolivia	7.20
Hungría	7.15
Senegal	7.10
Albania	7.05
Rep. Dominicana	6.95
Ucrania	6.90
Georgia	6.80
Colombia	6.75
Perú	6.60
Bhutan	6.57
Liberia	6.55
Sri Lanka ▲▲	6.55
Indonesia	6.50
Tunez	6.50
Kosovo	6.45
Macedonia	6.45
Malawi	6.45
Paraguay	6.45
Burkina Faso ▲▲	6.40
Niger	6.30
Papua Nueva Guinea ▲	6.30
Filipinas	6.30
Kenia	6.25
Moldavia	6.20
Kirguistán ▲	6.15
Sierra Leona	6.15
Bosnia Herzegovina	6.10
México	6.10
Tanzania	6.10
Guinea ▲	6.05
Zambia	6.00

Democracias altamente defectuosas

Puntaje < 6

10

Mali	5.95
Ecuador	5.90
Costa de Marfil	5.80
Honduras ▼	5.80
Lesoto	5.60
Turquía ▼	5.55
Madagascar	5.35
Nigeria	5.35
Guatemala	5.05
Nepal	4.90

Autocracias moderadas

Puntaje ≥ 4

18

Uganda ▼▼	5.43
Singapur	5.42
Armenia	5.12
Togo	5.07
Nicaragua ▼	4.92
Libano ▼	4.87
Malasia	4.78
Argelia	4.75
Bangladesh ▼	4.62
Rusia	4.55
Kuwait	4.50
Mozambique ▼	4.48
Jordania	4.37
Bielorrusia ▲	4.33
Mauritania	4.22
Angola	4.20
Haiti ▲	4.10
Emiratos AU ▲	4.00

Autocracias duras

Puntaje < 4

40

Camerún	3.92
Rwanda	3.88
Zimbabwe ▼	3.83
Burundi ▼	3.80
Kazajstán	3.80
Marruecos	3.80
Venezuela ▼	3.80
Qatar	3.73
Egipto	3.70
Pakistan	3.70
Rep. Centro Africana ●	3.60
Iraq	3.60
Cuba	3.58
Camboya	3.57
Burma	3.50
DR Congo ●	3.47
Chad	3.45
Azerbaiyán	3.43
Vietnam	3.35
China	3.28
Rep. Congo	3.25
Tailandia	3.25
Bahrein	3.23
Uzbekistan	3.17
Afganistán	3.02
Etiopia	3.02
Oman	3.00
Tayiquistán	2.98
Iran	2.92
Laos	2.92
Turkmenistán	2.85
Sudan del Sur ●	2.62
Corea del Norte	2.60
Libia ●	2.57
Arabia Saudita	2.57
Sudan	2.23
Eritrea	2.12
Yemen ●	1.80
Síria ●	1.75
Somalia ●	1.43

▲ Movimiento a una categoría superior (cada flecha señala una categoría)

▼ Movimiento a una categoría inferior (cada flecha señala una categoría)

● estados fallidos



Transformación Económica

Modo crisis perpetua

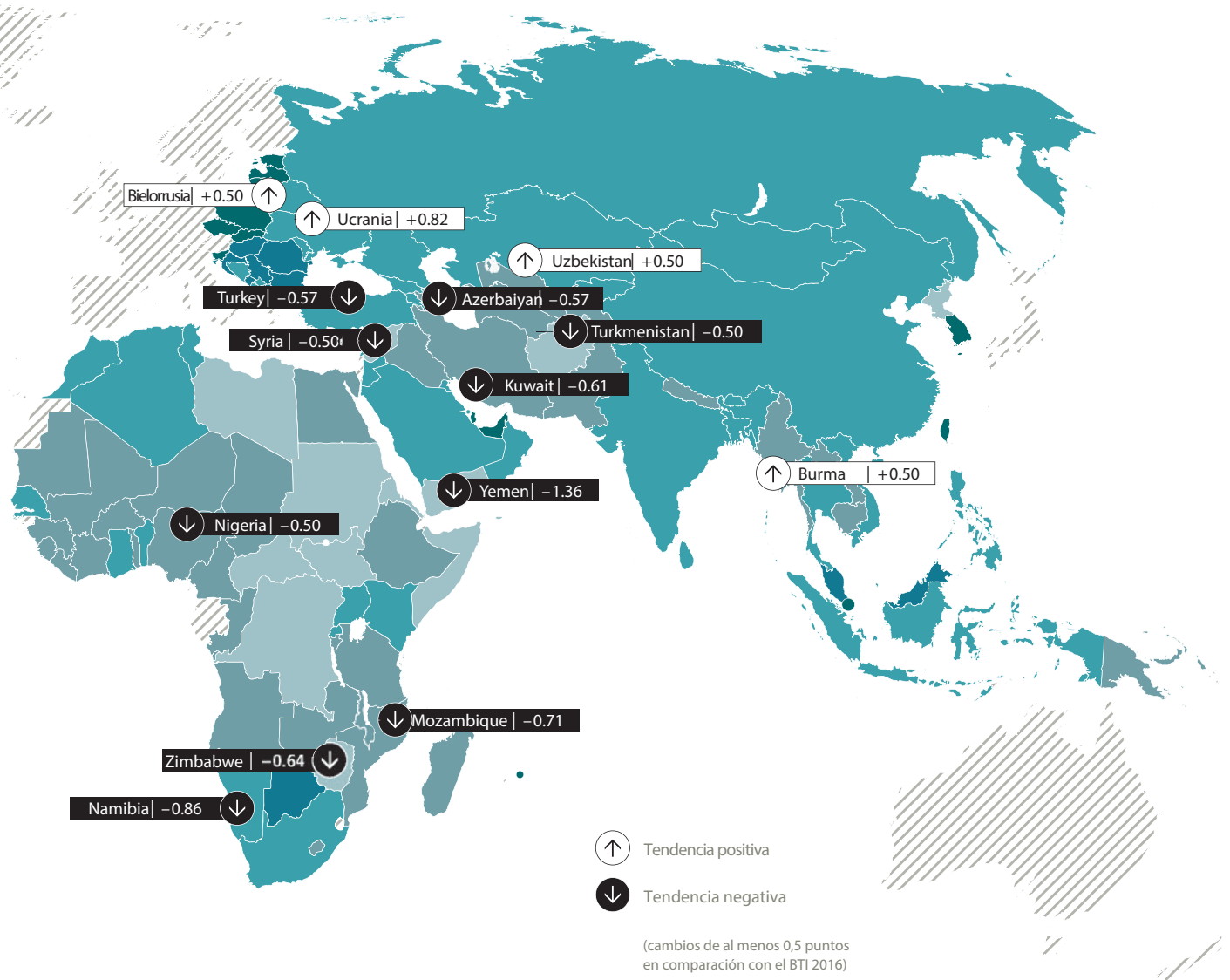
A lo largo de los últimos 10 turbulentos años desde el punto de vista económico, muchos países en desarrollo y en transformación han sufrido economías debilitadas que están sujetas a una mayor inestabilidad y, en algunos casos, a una brecha cada vez mayor entre ricos y pobres. La continua disminución de los precios de los productos básicos en los últimos dos años nuevamente ha exacerbado significativamente esta tendencia. En su mayor parte, sin embargo, este mal estado de cosas no puede atribuirse únicamente a factores económicos globales. La mala gestión, el clientelismo y la falta de capacidad de reforma económica han jugado al menos un papel importante, particularmente con respecto a las autocracias.

La última década ha sido una fase económicamente difícil para la mayoría de los países en desarrollo y en transformación. Tres fenómenos de crisis se destacan en particular. En primer lugar, la profunda crisis económica y financiera mundial provocó la caída de las exportaciones y la fuga de capitales en muchos países, y finalmente una recesión económica de la cual algunos de los 129 países en desarrollo y en transformación aún no se han recuperado por completo. Los principales indicadores macroeconómicos cayeron en consecuencias inmediatas o algo tardías de la crisis económica y

financiera, especialmente para las economías poderosas como China y Singapur que estaban profundamente integradas en los flujos comerciales mundiales, pero también para países como Armenia o Kazajistán que dependían de fuertes economías vecinas. Mientras que las economías de Asia y América Latina (con la excepción de Brasil) se recuperaron relativamente rápido, algunos países particularmente en Europa Central y Sudeste han superado sus crisis solo lentamente, y aún no han recuperado sus niveles de desempeño económico relativamente altos de la década anterior.

En segundo lugar, la fuerte caída en muchos precios de las materias primas desde el pico en 2011, así como el precio del crudo desde el otoño de 2014 combinado con un dólar fuerte, ha tenido un efecto particularmente potente en las economías dependientes de exportaciones y poco diversificadas, lo que implicó crisis en las balanzas comerciales y de presupuesto, así como recesiones. La estabilidad económica se vio sacudida en numerosos países y, en muchos casos, incluso se puso en tela de juicio la viabilidad de los modelos de desarrollo orientados a la exportación. Los gobiernos que





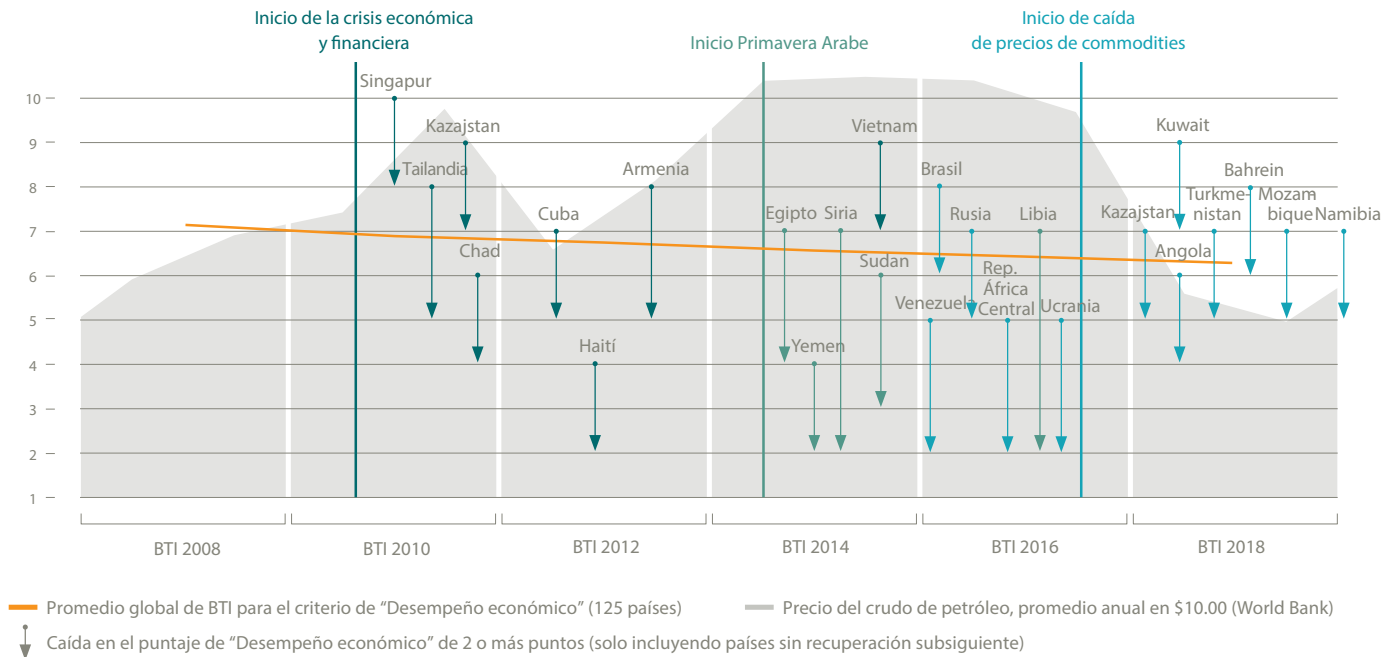
buscaban corregir las disparidades sociales se vieron privados de los recursos financieros necesarios para luchar contra la pobreza y apoyar los programas de participación social, y la desigualdad social comenzó una vez más a aumentar. En el período de revisión actual, de febrero de 2015 a enero de 2017, la caída de los precios de los productos básicos provocó una caída dramática del rendimiento económico, especialmente en los Estados del Golfo de Bahrein y Kuwait, los Estados de Asia central de Azerbaiján, Kazajstán, Mongolia y Turkmenistán, y en exportadores de productos básicos de África meridional como Angola, Namibia y Mozambique.

En tercer lugar, en los últimos 10 años ha habido un número

particularmente elevado de trastornos sociales y políticos violentos en todas las regiones del mundo, desde Afganistán hasta Malí y Venezuela. El mundo árabe se ha visto profundamente afectado por este fenómeno desde principios de 2011. Toda una región se ha desestabilizado, y la creciente polarización política ha llevado a guerras civiles en Libia, Siria y ahora Yemen, que han paralizado el desarrollo económico y destruido las infraestructuras. Solo unos pocos países, como Madagascar y Ucrania, han logrado recuperar la estabilidad y renovar el crecimiento económico después de graves crisis políticas. En otros países, como Bahréin y Nigeria, en cambio, una combinación histórica de polarización militante, divisiones religiosas y pobre gobernanza se

arraigó más profundamente, lo que condujo no al colapso repentino, sino a una erosión constante -pero igualmente devastadora- de la estabilidad y el rendimiento económico.

Muchos países se han encontrado en una situación de crisis perpetua como reacción a las conmociones externas o debido a la desestabilización interna. La disminución en los puntajes globales promedio para la transformación económica ha continuado. Sin duda, el deterioro actual de 0.05 puntos para los 119 países que se han encuestado continuamente desde el BTI 2006 no es en sí mismo motivo de alarmismo. Pero, por otro lado, esta es la quinta vez consecutiva que este puntaje del BTI ha bajado, de 5.74 en el BTI



2008 a 5.54 hoy. En este nivel, una disminución de 0,20 puntos en 10 años difícilmente representa un colapso, pero a pesar de ello pone de manifiesto un debilitamiento significativo del tejido económico global de mercado.

Los datos actuales de transformación económica muestran claramente que el final de la última década marcó un punto de inflexión. Hasta entonces, gracias a la rápida expansión del comercio mundial, era evidente un aumento claro en la mayoría de los indicadores económicos del BTI; sin embargo, los indicadores de desempeño económico y social comenzaron a caer, comenzando con el BTI 2010, disminuyendo sucesivamente en los años subsiguientes a los actuales, en algunos casos a niveles significativamente más bajos. Mirando hacia atrás, esto ilustra nuevamente el apogeo de la globalización en los años previos a la crisis económica y financiera, pero también muestra claramente la profunda ruptura en la transformación económica producida por el colapso del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers en septiembre de 2008. En este sentido, los puntajes del BTI 2008, que llegaron en vísperas de la crisis económica y financiera, marcaron

tanto el pico como el final de una larga fase de crecimiento económico global y, por lo tanto, sirven en lo que sigue como punto de referencia y punto de comparación positivo.

Una quinta parte arriba, dos quintos abajo

En solo 27 de los 125 países que se han encuestado continuamente desde el BTI 2008, el puntaje general de la transformación económica mejoró con un incremento de al menos 0,25 puntos desde ese momento. Los mayores crecimientos se registraron en los países con una base de referencia baja, como Bhután (+2.25), Costa de Marfil y Liberia (cada uno +1.43) y Ruanda (+1.61). Sin embargo, China (+0.50), una de las economías más grandes e importantes del mundo, también pertenece a este grupo. Más allá de esto, entre aquellos que lograron un significativo progreso en la transformación económica de al menos 0.50 puntos, solo tres países -Perú, los Emiratos Árabes Unidos y Uruguay- tienen un estado avanzado de desarrollo económico de mercado, según la clasificación de BTI.

En los últimos dos años, 16 países han mejorado en más de 0.25 puntos, con Argentina (+0.79) y Ucrania (+0.82) mostrando incrementos particularmente fuertes. Sin embargo,

en ninguno de los dos países la mejora en el estado de transformación económica aún ha sido suficiente para equilibrar las pérdidas registradas en los últimos 10 años.

Además, el progreso en la regulación del sector privado y el mercado aún debe ir acompañado de una mejora en los indicadores macroeconómicos o sociales de referencia. En cambio, las altas tasas de inflación, combinadas con las reducciones de los subsidios del sector energético que elevaron los precios del gas y la electricidad en más del 700%, perjudicaron no solo los presupuestos privados, sino también los presupuestos de las pequeñas y medianas empresas en particular. En un contexto de apertura de mercados y aumento de la competencia, las empresas medianas en particular lucharon para hacer frente a un rápido declive en la demanda interna, a menudo respondiendo con despidos.

En contraste con la experiencia argentina, la economía ucraniana, que anteriormente estaba al borde del colapso bajo la influencia del Euromaidán y la intervención rusa, volvió a un crecimiento moderado después de años de recesión, con tasas de inflación que disminuyeron a un nivel bajo. Además de las actividades de inversión significativamente

más fuertes y una ligera expansión de la demanda interna, numerosas reformas en el sector de compras públicas, los sectores de la banca y la energía y el sistema tributario contribuyeron tanto a la creación de un marco regulatorio de mercado más estable como a la recuperación económica en general.

Por el contrario, el estado económico se ha deteriorado en los últimos 10 años en al menos 0,25 puntos en 56 países, y por lo tanto en el 45% de la muestra de países. Los reveses han sido particularmente nefastos en los países árabes que sufren guerras civiles: Libia (-2.86), Sudán (-1.54), Siria (-2.79) y Yemen (-2.29), así como en Venezuela (-1.50). El hecho de que esta lista de países con declive incluya a Brasil, India, México, Rusia, Sudáfrica, Corea del Sur y Turquía, o casi todos los pesos pesados económicos entre los Estados del G-20 del sur y este global, así como también otros países ancla importantes, como Egipto, Nigeria y Tailandia, son preocupantes.

La regresión en el estado de transformación económica en más de 0,25 puntos fue evidente en 24 países en los últimos dos años, con ocho países que mostraron una disminución de más de 0,50 puntos. Ni Yemen devastado por la guerra civil, ni Azerbaiyán y Kuwait, dependientes de los precios de la energía e insuficientemente diversificados, ni Mozambique, Venezuela o Zimbabwe, pobremente gobernados y desfavorecidos económicamente, son sorpresas en esta lista. Sin embargo, Namibia (-0.86) y Turquía (-0.57), dos países anteriormente bastante estables, también se cuentan entre los países que muestran las mayores caídas. Cada uno de estos son emblemáticos de las tendencias regionales inquietantes.

La dirección de SWAPO en Namibia es representativa de una serie de partidos gubernamentales en el sur de África que aún gozan de un fuerte apoyo electoral y mayorías

parlamentarias seguras debido a la amplia legitimidad ganada en el curso de la descolonización, la lucha por la independencia o un movimiento antiapartheid, y que a menudo caen en el clientelismo. En los últimos 10 años, bajo la SWAPO de Namibia, el Partido Democrático en Botswana, el FRELIMO en Mozambique y el ANC en Sudáfrica, a veces se han producido disminuciones masivas en la eficiencia administrativa y presupuestal, junto con castigos reducidos por el abuso de poder y un estado de derecho general disminuido. Las deficiencias de la gobernanza de Namibia en el ámbito económico, incluida una administración inflada, un presupuesto estatal excesivamente extendido y la falta de participación en una reforma agrícola orientada al consenso, se han vuelto particularmente claras en tiempos difíciles económicamente por la disminución constante del precio del mercado mundial para el uranio, una sequía persistente y la disminución de la demanda y las inversiones del país vecino de Angola, rico en petróleo y también golpeado por la crisis.

Turquía, que durante muchos años fue el motor de crecimiento de Oriente Medio, tiene un problema aún mayor de liderazgo. Al igual que la SWAPO de Namibia, el AKP turco ha jugado un papel importante en la democratización y la liberalización del país. Sin embargo, el papel de liderazgo así obtenido le permitió construir nuevas redes clientelistas, y el presidente Recep Tayyip Erdoğan ha tratado de defender esta posición de poder de maneras cada vez más paranoicas contra los llamados enemigos internos y externos de Turquía. Muchos retrocesos en la transformación económica de los últimos dos años son atribuibles a la dura reacción del gobierno ante el intento de golpe de julio de 2016 y la proclamación del estado de emergencia. Desde entonces, los observadores han notado un deterioro significativo, especialmente

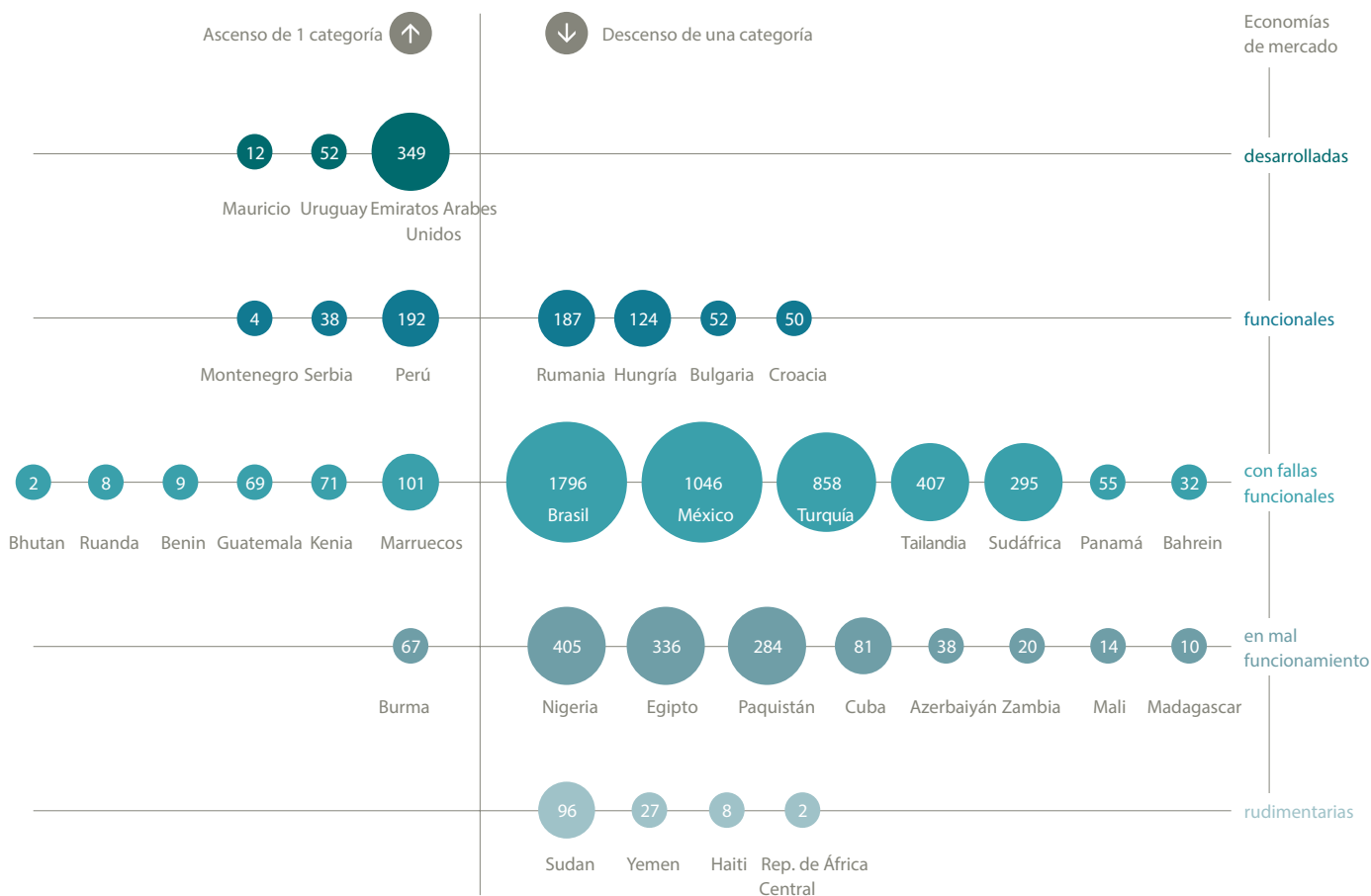
en las condiciones para el sector privado, incluyendo expropiaciones de empresas dirigidas por personas supuestamente críticas del gobierno. La caída en el turismo también ha ejercido presión sobre el desempeño económico.

La importancia de una buena gobernanza económica

Las tendencias negativas en el nivel de los puntajes de transformación económica global promedio, así como a nivel de país, también se confirman con respecto a las categorías designadas de desarrollo económico del BTI. En el BTI de 2016, unos 30 países fueron clasificados como economías de mercado desarrolladas o al menos como economías en funcionamiento, cumpliendo así la mayoría de los aspectos de una economía de mercado sostenible y socialmente incluyente. Este grupo hoy ha disminuido a 26 países.

Sin embargo, dado el carácter de crisis de las recientes tendencias económicas mundiales, la quinta parte restante de las economías con buen puntaje todavía muestra un grado considerable de capacidad de dirección de la política económica. Mauricio, un país que se destaca en gran medida como una excepción dentro de África, incluso ha aumentado por primera vez en el pequeño grupo de 15 economías desarrolladas de mercado. Gracias a la estabilidad política y una política económica flexible y orientada a largo plazo, el país insular ha logrado convertirse en el destino preferido por los inversores extranjeros y apunta al desarrollo de sectores económicos estratégicamente importantes. La implementación constante del programa gubernamental 2015-2019, que apunta al desarrollo social inclusivo y sostenible en cooperación con las Naciones Unidas a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ha sido fundamental para permitir las mejoras observadas hoy.

Caída de los pesos pesados económicos



Cambio en el estatus general de transformación económica entre el BTI 2008 y 2018. El tamaño de la burbuja del país corresponde al respectivo PIB en dólares corrientes, millones (World Bank data).

En los últimos 10 años, Montenegro, Serbia y Perú han escalado al grupo de países considerados economías de mercado en funcionamiento. Los dos países del sudeste de Europa han emprendido numerosos esfuerzos de reforma en el contexto de las negociaciones de adhesión a la UE y han mejorado claramente las configuraciones institucionales y las garantías en la organización de sistemas de mercado y competencia, especialmente en las áreas de política antimonopolio, el desmantelamiento de las barreras comerciales y el sistema bancario. En Montenegro, las debilidades restantes incluyen un sector informal inmenso, corrupción generalizada y crimen organizado, y un nivel preocupante de deuda nacional. En Serbia, donde el papel del sector privado se ha fortalecido sustancialmente, la privatización de las empresas estatales improductivas sigue siendo lenta y la ineficacia persiste en la

administración estatal, que está muy saturada. Perú ha mejorado su condición de transformación económica principalmente a través de una política económica más orientada a la inclusión social y la sostenibilidad. Los programas sociales administrados profesionalmente y dirigidos en especial a las regiones desfavorecidas de las tierras altas han contribuido en este sentido a una disminución de la tasa de pobreza de casi el 55% a poco más del 20% en el transcurso de 15 años.

Sin embargo, a diferencia de estos logros, ha habido considerables reveses de transformación económica en los países del G-20 Brasil, México, Sudáfrica y Turquía, así como en Bahrein, Panamá y Tailandia, lo que ha llevado a una categorización de estos países como economías de mercado con defectos funcionales. Panamá representa una excepción entre estos países, ya que un ligero deterioro en la organización de los sistemas de

mercado y competencia, debido en parte a los puntajes más bajos del sistema bancario asociados con los Papeles de Panamá, fue suficiente para impulsar su devaluación de categoría. Por el contrario, el estado de transformación económica en todos los demás países de este grupo ha disminuido enormemente en los últimos años, principalmente como consecuencia de fallas en la gobernanza.

En Bahrein, Brasil y México, la reducción de los ingresos de commodities ha ejercido presión sobre las finanzas del Estado y las tasas de crecimiento económico han disminuido rápidamente. Sin embargo, los enormes reveses de transformación en estos tres países no pueden atribuirse únicamente a estos desarrollos. La disminución de los ingresos de exportación simplemente ha exacerbado las circunstancias de crisis desencadenadas por otras deficiencias políticamente inducidas

en la gobernanza. En Bahreín, por ejemplo, estos fallos en la gobernanza implican una extrema polarización política y una discriminación masiva contra la mayoría chiíta del país. En Brasil, tales fallas están asociadas con una corrupción rampante y una crisis de confianza en la política, mientras que en México, la incapacidad del gobierno para detener una guerra criminal contra las drogas ha socavado la estabilidad y el estado de derecho.

Sudáfrica, Tailandia y Turquía ilustran de manera particular las graves consecuencias de la mala gobernanza económica. En Sudáfrica, el gobierno de Zuma rompió su promesa de introducir una reforma económica fundamental destinada a superar la pobreza masiva y las altas tasas de desempleo.

Las severas tensiones sociales han inquietado a los potenciales inversores, mientras que el presidente y sus seguidores son aparentemente muy corruptos, y la influyente familia Gupta parece dictar incluso que se llenen las posiciones del gabinete. Un sistema educativo miserable junto con una moneda y políticas financieras erráticas obstaculizan las oportunidades para el desarrollo económico sostenible.

Tailandia, al igual que Turquía bajo el presidente Erdoğan, muestra un marcado grado de polarización política. Aquí también, un golpe militar en 2014 -esta vez exitoso- representó un descanso. Al igual que Turquía, Tailandia también ha experimentado una fuerte disminución del turismo como consecuencia de las tensiones políticas internas, y sus relaciones comerciales exteriores han sufrido, como lo demuestra el fracaso de las negociaciones de un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Bajo el gobierno de la junta, la organización de los sistemas de mercado y competitivos se ha diluido constantemente en los últimos años a favor de la élite del poder económico militar. La falta de transparencia y responsabilidad facilita el amiguismo

y las camarillas de seguidores que se enriquecen a sí mismas. La guerra contra la corrupción declarada por los militares tiene poca credibilidad, ya que los militares y la policía son las instituciones más corruptas a los ojos de la mayoría de los tailandeses.

El grupo de países que se ha degradado en los últimos 10 años a la categoría de economías de mercado con defectos funcionales ilustra vívidamente el hecho de que los problemas económicos globales inevitablemente explican solo una parte de las dificultades de la transformación económica. Por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos, al igual que Bahreín y México, tuvieron que hacer frente a la caída en los precios del petróleo, y la significativamente más pequeña economía de Uruguay se vio afectada al igual que Brasil por la disminución de la demanda internacional (y, además, por la desaceleración económica de su vecino más grande).

Emiratos Árabes Unidos es el único país que ha alcanzado el máximo de 10 puntos con respecto al desempeño económico en el BTI 2018. Con una estrategia de desarrollo orientada a largo plazo y un régimen de comercio abierto, redes de seguridad social eficaces y un sistema educativo alineado con las necesidades de la economía, el país logró amortiguar el impacto de la caída de los precios de la energía. En los últimos años, la dependencia del país de las exportaciones de energía se ha reducido a propósito, con el objetivo de disminuir la participación del sector del petróleo en la economía global a solo 5% para 2021.

En Uruguay, la coalición gobernante izquierdista Frente Amplio logró desde 2005 fortalecer la economía con reformas estructurales paso a paso, a la vez que logró reducir la deuda nacional, atraer más inversión directa y alcanzar mayores tasas de crecimiento. Al mismo tiempo, la pobreza se ha combatido con éxito y se ha reducido la tasa de

desempleo. Incluso si, como muchos países latinoamericanos en los últimos años, la disminución de la demanda redujo significativamente la tasa de crecimiento económico del país, Uruguay ha logrado un alto grado de inclusión social según los estándares regionales, así como un orden económico de mercado estable.

Estos ejemplos positivos de desarrollo subrayan el hecho de que los shocks externos como tales no siempre se deben considerar responsables de los procesos de transformación económica disruptiva. Mucho más crítica es la calidad de la gobernanza económica, es decir, la capacidad de un gobierno dado para fortalecer las instituciones económicas de mercado a largo plazo; contrarrestar la concentración de poder de mercado por cárteles, monopolios y redes de elite; y para garantizar un régimen de política socialmente incluyente. Algunos pesos pesados económicos no han tenido éxito en estas tareas en los últimos años.

El grupo de países que no califica tanto como economías de mercado desarrolladas o al menos como economías de mercado en funcionamiento ha crecido a cuatro quintas partes del total por primera vez en la historia del BTI. Además, otro punto preocupante documenta el impacto negativo del extremismo militante, el fanatismo religioso y la violencia política, el tercer síntoma de crisis antes mencionado. El BTI 2018 hoy clasifica a 13 países como economías de mercado rudimentarias sin casi ningún orden económico vigente. Y si bien este grupo ha crecido constantemente en los últimos años, ha alcanzado un nuevo récord, y hoy representa el 10% de la muestra total del país.

Graves deficiencias económicas y sociales

Las pronunciadas disminuciones registradas en el estado de transformación económica desde el

BTI 2008 se deben principalmente a un nivel significativamente más bajo de desempeño económico (-0.95), y una caída paralela en la estabilidad macroeconómica (-0.57). El desempeño económico -esto es, la visión general de indicadores de desempeño económico relevantes de crecimiento económico, desempleo, inflación, balanza comercial, endeudamiento y tasas de inversión- ha disminuido aún más en los últimos dos años como un promedio mundial de los 129 países del BTI. Específicamente, 20 países lograron mejorar su desempeño económico en los últimos dos años, mientras que 41 países muestran, en algunos casos, datos económicos de referencia notablemente más débiles.

La observación a largo plazo es aún más desalentadora. En general, el desempeño económico ha disminuido en 71 países desde el BTI 2008, y ha mejorado solo en 17 países, y de estos, las mejoras solo han sido significativas en Bangladesh, Bután, Costa de Marfil y Togo (cada uno +2). Una relación similar, sino tan drástica (62 deterioros, 23 mejoras) también se mantiene para la estabilidad macroeconómica.

La disminución del rendimiento económico y la estabilidad macroeconómica recayeron en muchos países sobre la base de los estratos de bajos ingresos de la población. El nivel de desarrollo socioeconómico, siempre el mayor punto de vulnerabilidad de la transformación económica, una vez más ha disminuido en 0,25 puntos en la última década, y ha mostrado un deterioro particularmente fuerte en los últimos dos años. La pobreza y la desigualdad han empeorado en 41 países desde el BTI 2008, y ha mejorado solo en 17 países. En este sentido, ambos problemas sociales centrales están implicados: el grado terriblemente alto de exclusión social que se ha expresado constantemente en los datos del BTI, y la mayor intensificación de la marginación

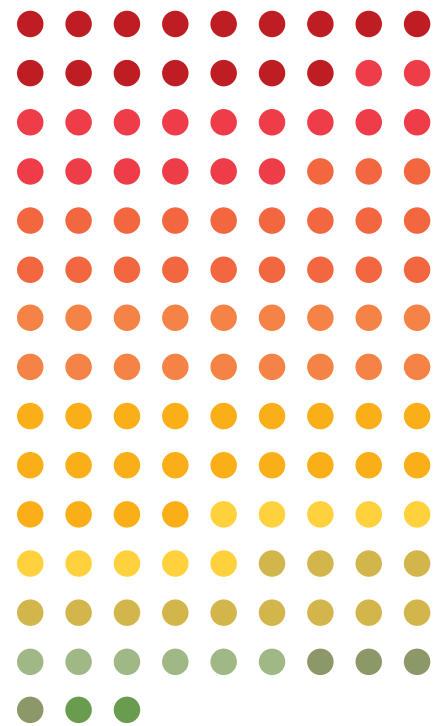
económica que se ve en la actualidad. Un total de 72 países, o más de la mitad de las naciones examinadas en el BTI, reciben solo cuatro puntos o menos en una escala de 10 puntos con respecto a su nivel socioeconómico desarrollo.

En estos países, 40 de los cuales se encuentran en el continente africano, la pobreza y la desigualdad son muy pronunciadas, persistentes y evidentemente de naturaleza estructural. Por el contrario, apenas un quinto de todos los países muestran un nivel de desarrollo socioeconómico de siete puntos o más, por el cual grandes porciones de la población no están excluidas de la participación social debido a la pobreza o la desigualdad. Estas dos figuras clave -de 70 países muy pobres y desiguales, y 25 países socialmente inclusivos- no han cambiado en el transcurso de los últimos 10 años.

Sin embargo, la regresión social es más evidente en el grupo de países en un nivel medio de desarrollo, con cinco puntos (como Filipinas) o seis (como Serbia). Aquí, la distribución de los países ha cambiado claramente en la dirección de una mayor marginación. Mientras que el BTI 2008 aún mostró más países con seis puntos que con cinco puntos, en el BTI 2018 solo hay 10 países en el grupo medio alto en comparación con 22 países en el grupo medio bajo. En los últimos 10 años, ningún país se ha convertido en el grupo intermedio algo más inclusivo; por el contrario, siete de los países previamente clasificados en el nivel seis han perdido al menos un punto.

Las causas aquí varían desde el colapso del Estado (Libia), el crecimiento de la pobreza y las crisis de refugiados (Líbano) y un alto grado de desigualdad social (Panamá) y discriminación (Turquía), a la recesión (Jamaica) o una brecha pronunciada entre regiones (Colombia, Indonesia). Además, Bahrein y Omán han visto sus puntajes caer de siete a cinco puntos. En el caso de Bahrein, la

A pesar de resultados modestos en educación y bienestar, más países enfrentan pobreza y exclusión estructural generalizada.



Sólo un pequeño número de países logra un alto nivel de desarrollo socioeconómico.

Código de color (de arriba hacia abajo)
verde (10-8 puntos, positivo)
amarillo (7-5 puntos, promedio)
rojo (4-1 puntos, negativo)

Leve mejora en política de régimen de bienestar y educación durante los últimos diez años.

Régimen de bienestar

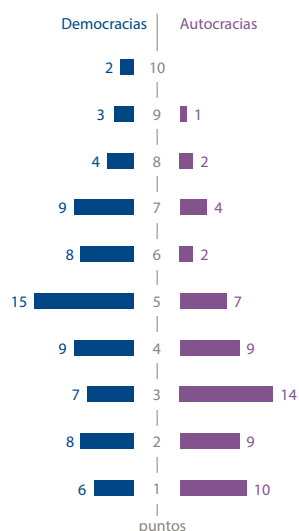


Política educativa

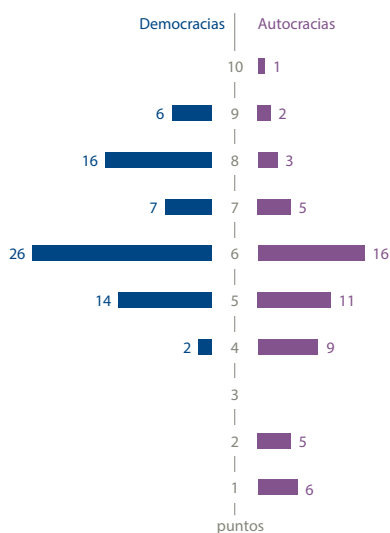


discriminación masiva contra los chiítas explica esta disminución, mientras que un crecimiento rápido de la desigualdad es la causa de la caída de los puntajes de Omán. Sin duda, las causas específicas de cada país en los casos aquí esbozados son demasiado variadas para poder hablar explícitamente de una tendencia uniforme; sin embargo, sigue siendo claro que el número de países por

Nivel de desarrollo socioeconómico en democracias y autocracias, BTI 2018



Desempeño económico en democracias y autocracias, BTI 2018



encima del punto medio, la escala BTI de 10 puntos ha disminuido de 43 a 35 en el transcurso de una década.

El grado de pobreza y desigualdad ha aumentado en 10 países, aunque en niveles muy diferentes. Pequeños aumentos en la exclusión social son evidentes en Croacia, Kuwait y Uruguay, a pesar de que los tres países permanecen en el quinto mejor lugar de todos los países encuestados con respecto a su nivel de desarrollo. Más grave, por el contrario, es el hecho de que la exclusión social en Sudáfrica ha empeorado debido a las altas tasas de desempleo, a pesar de los éxitos moderados en la lucha contra la pobreza y (aún extremadamente

grave) la desigualdad. Mientras tanto, las disminuciones socioeconómicas en Azerbaiyán, Omán, Tayikistán, Turkmenistán, Venezuela y Zimbabue han sido producidas en diferentes grados y combinaciones de recesiones debido a la caída en los precios de los productos básicos, la flagrante desigualdad, las redes comerciales controladas por la élite y la mala gestión negligente. La mala gobernanza económica, ya sea por la falta de diversificación económica o por prácticas corruptas de élite, también juega un papel decisivo aquí en las recesiones socioeconómicas.

Las inversiones estatales en el sector educativo y el régimen de bienestar social se encuentran entre los principales medios políticos para contrarrestar la erosión en el nivel de desarrollo socioeconómico de un país. Aquí también, la gobernanza económica de la mayoría de los países en vías de desarrollo y transformación es convincente solo en un grado limitado. Cuatro quintas partes han descuidado persistentemente sus sistemas educativos en los últimos 10 años. A lo sumo, es una señal positiva de que, como promedio mundial, los esfuerzos del gobierno no han disminuido frente a la disminución de las tasas de crecimiento y los presupuestos ajustados. Sin embargo, y esta es la mayor sorpresa positiva en estos tiempos de crisis, los regímenes de bienestar han registrado una leve mejora general, tanto en lo que respecta a la igualdad de oportunidades como a las redes de seguridad social. En 62 países, los formuladores de políticas ahora se enfocan más en la inclusión social que hace diez años. Esto es particularmente evidente en países extremadamente pobres pero con mentalidad reformista como Guinea, Liberia y Myanmar, pero también en Estados como El Salvador, Mongolia y Ruanda, donde los gobiernos cuentan con una agenda sociopolítica sólida. La inversión en redes de seguridad social ha mejorado, en promedio, en los países con gobierno

democrático, con un aumento de 0,40 puntos en comparación con el BTI 2008, mientras que los gobiernos autoritarios han mostrado pocos cambios en sus puntajes de hace 10 años.

¿Y los éxitos de la reforma autoritaria? Sin embargo, hay ejemplos de éxito entre los reformadores autoritarios, específicamente en relación con la educación. Mientras que los países democráticamente gobernados obtienen puntajes marcadamente mejores que los gobiernos autoritarios en todos los indicadores económicos, la brecha en el área de educación es la más pequeña y se ha reducido aún más en los últimos años, impulsada por los éxitos en políticas educativas en países como China, Jordania, Kuwait y Ruanda. Incluso las regresiones globales en el nivel de desarrollo socioeconómico se pueden rastrear -al menos como una tendencia a largo plazo- a niveles más altos de pobreza y desigualdad en las democracias.

Dado algunos impresionantes éxitos de desarrollo entre los Estados gobernados por autoritarios (por ejemplo, la reducción significativa de China en su tasa de pobreza), en los últimos años se pregunta cada vez más si las autocracias, con su menor grado de participación política y alta capacidad de implementación del Estado central, podrían ser particularmente capaces de garantizar el crecimiento económico y la igualdad social a través del desarrollo económico de mercado combinado con fuertes características de planificación estatal. Los modelos asiáticos como China, Malasia y Singapur a menudo se destacan aquí como ejemplos de cómo las crecientes tensiones sociales pueden mitigarse a través de la planificación e implementación del gobierno a largo plazo, aunque esto se produce a costa de las libertades políticas. El programa Visión 2020 de Ruanda, que cuenta con el firme respaldo de la comunidad internacional de donantes, ha

demostrado éxitos notables en los sectores de la educación y la salud, así como en la reducción del crecimiento de la población.

¿Estos ejemplos positivos de desarrollo hablan de las ventajas de un modelo de desarrollo autocrático y estrictamente gestionado para todos los países en transformación? Se pueden hacer tres observaciones básicas al respecto. Primero, si bien es cierto que hay algunas dictaduras modernizadoras exitosas, esta lista se ha acortado en los últimos años. Entre los países así designados, solo Malasia, Qatar, Singapur y los Emiratos Árabes Unidos pudieron retener un lugar en el grupo principal de 26 economías de mercado desarrolladas o en funcionamiento del BTI 2018. Los Estados del Golfo como Bahrein, Kuwait y Omán, por el contrario, han caído de este grupo debido a la falta de diversificación o una mala gestión extensiva, y ahora muestran claros defectos funcionales, incluidos graves desplomes en el rendimiento económico. Por lo tanto, la lista de cuatro economías autoritarias desarrolladas o al menos que funcionan es bastante corta, incluso cuando se consideran adicionalmente el desarrollo de las dictaduras para alcanzar un nivel medio (China) o bajo (Ruanda).

En segundo lugar, los modernizadores autoritarios exitosos también muestran fases de crecimiento débil, y a pesar de sus registros generalmente bastante positivos se topan con ciertas limitaciones con respecto a su crecimiento adoptado y modelos sociales, cuyo funcionamiento representa la única fuente de legitimación de los gobiernos. Singapur, el país más desarrollado de este grupo, depende en gran medida del mercado mundial, y durante los últimos dos años se ha mantenido en el umbral de la recesión con tasas de desempleo crecientes y un creciente déficit público. Durante la última década, la ciudad-estado ha mostrado un estado de

transformación económica en declive casi continuo (-0.68). China, que ha mostrado el mayor crecimiento de convergencia entre este grupo, ha pasado del lugar 52 en el BTI 2008 a un lugar hoy entre las 30 economías con mejores puntajes, aunque ahora tiene que lidiar con la disminución de las exportaciones, graves daños medioambientales y niveles crecientes de deuda nacional. Sin embargo, la necesidad de diversificación se ha vuelto clara dado el primer déficit del balance comercial del país en 15 años, y por primera vez se han reducido algunas medidas del estado de bienestar.

En casi todas las autocracias previamente exitosas desde el punto de vista económico, estas fases débiles o de transición han conducido a una mayor desigualdad, una incidencia creciente de abuso de poder y una creciente represión. La mayor desigualdad social se puede remontar a causas diferentes y con frecuencia superpuestas, ya sean disparidades, al igual que en el caso de la brecha Este-Oeste de China; características étnicamente condicionadas y ancladas estructuralmente como en Malasia o Ruanda; o la influencia de una clase de liderazgo pequeña y desproporcionadamente monopolizadora de ganancias, como en la mayoría de los Estados del Golfo. Algunos gobiernos, como los de China y Singapur, han reconocido cuán potencialmente explosiva podría ser esa desigualdad, y han buscado, solo con modesto éxito hasta ahora, contrarrestar esta tendencia.

Además, muchas dictaduras modernizadoras han tenido que lidiar con las graves consecuencias del clientelismo y las prácticas opacas, ya que los casos de corrupción, algunos de ellos bastante graves, se han hecho públicos. Singapur, a pesar de que sigue siendo un líder global en términos de política anticorrupción, ha visto solidificarse a la élite gobernante dinástica en torno a la familia Lee.

Temasek Holdings, un

conglomerado estatal bajo el liderazgo de la esposa del primer ministro, enfrenta crecientes preguntas sobre su falta de eficiencia y prácticas comerciales no transparentes. Mientrastanto, Malasia se vio sacudida por un escándalo de corrupción de alto nivel en el que el primer ministro fue acusado de transferir alrededor de 700 millones de dólares del fondo de desarrollo estatal a su cuenta privada. En China, los informes de los medios internacionales relacionados con la publicación de los Papeles de Panamá han ofrecido una mirada a las enormes sumas financieras almacenadas por los principales cuadros del partido, incluida la familia del jefe de Estado Xi Jinping, en cuentas bancarias extranjeras. Mientras tanto, es probable que la campaña anticorrupción a gran escala del país haya tenido al menos tanto que ver con las purgas partidistas como con el castigo del abuso en la administración. En Ruanda, que registró el mayor puntaje entre las dictaduras modernizadoras, los procesos de corrupción contra las principales figuras militares revelaron que las prácticas de abuso en las oficinas asociadas con la explotación ilegal de minas se conocían desde hacía años, pero que su castigo parece ahora políticamente oportuno.

La tercera observación se refiere a la comparación entre todas las democracias y autocracias encuestadas por el BTI con respecto al desempeño económico y social, que resulta extremadamente desfavorable para este último grupo de países. Sin duda, mientras que solo 26 de las 71 democracias han logrado un nivel medio o un buen grado de inclusión social de seis puntos o más con respecto a su nivel de desarrollo socioeconómico, esto solo es cierto en un grupo mucho más pequeño de nueve de las 58 autocracias. Además de Malasia, Qatar, Singapur y los Emiratos Árabes Unidos, también destacan aquí Bielorrusia, Cuba, Kuwait, Rusia y Tailandia como

ejemplos positivos. La comparación del sistema produce resultados similares con respecto al económico, que en general recibe evaluaciones significativamente mejores. Aquí, 55 de las 71 democracias alcanzan puntuaciones económicas de satisfactorias a buenas, con seis puntos o más, en comparación con solo 27 de las 58 autocracias. Sin embargo, esta comparación no es causa de triunfalismo democrático. El estado de la transformación económica también se ha deteriorado para numerosas democracias económicamente importantes como Brasil, Hungría, México, Nigeria, Sudáfrica y Turquía, en algunos casos de manera significativa, y con un alto grado de corrupción, mala administración flagrante y pérdida de calidad democrática también innegable en todos estos casos.

Otra pregunta relevante es la capacidad de respuesta, la capacidad de implementación y los procesos de toma de decisiones democráticos eficientes en comparación con los proyectos de planificación impulsados por los autoritarios. Aquí, los datos del índice de gobernanza BTI ofrecen algunas primeras pistas. Si se examinan solo los 79 países con un mediocre o buen estado de transformación económica, las diferencias promedio entre las 56 democracias y 23 autocracias son menores en el caso de eficiencia de recursos y coordinación política, en 0,80 puntos cada uno, que para cualquier otro indicador de gobernabilidad. De hecho, a un nivel más alto de gobernanza, los gobiernos autoritarios tienen el beneficio de poder desplegar los recursos disponibles casi tan eficientemente como los que toman decisiones democráticas y de implementar varios objetivos políticos casi con tanto éxito dentro de una estructura coherente de gestión de políticas. Pero sigue habiendo una brecha cualitativa, porque por cada dictadura de desarrollo exitosa como Singapur, existen numerosos contrapartes

democráticos como los Estados Bálticos, Taiwán o Corea del Sur. Por el contrario, si uno tomara como base la muestra completa de países del BTI, entonces la brecha entre todas las democracias y autocracias con respecto a la eficiencia y la coordinación aumentaría aproximadamente a dos puntos completos. La estabilidad macroeconómica sirve para ilustrar la gran brecha entre las pocas autocracias bien administradas y las mal gobernadas, lo que esclarece la cuestión de la capacidad de los gobiernos de aplicar una política de estabilidad eficiente, coordinada y coherente que incluya la reducción de la deuda y la consolidación fiscal.

Solo siete autocracias -China, Kuwait, Qatar, Singapur, Tailandia, Uganda y los Emiratos Árabes Unidos- figuran entre los 30 países más estables desde el punto de vista macroeconómico, mientras que entre los 31 países más inestables, solo Nigeria se clasifica como una democracia. Una distribución casi idéntica surge cuando se evalúa el uso eficiente de los recursos disponibles y la coordinación política, que tienen una influencia significativa en la estabilidad macroeconómica.

Cinco autocracias (Malasia, Qatar, Ruanda, Singapur y los Emiratos Árabes Unidos) se encuentran entre las 30 principales, mientras que solo tres democracias (Lesoto, Nepal y Nigeria) se encuentran entre los 33 países más ineficientes y mal coordinados. Numerosos informes de países hacen referencia al efecto desestabilizador de la falta de eficiencia y la escasa coordinación en las autocracias, sugiriendo al menos la siguiente conclusión: para los cinco Estados más pobremente dirigidos, socialmente excluyentes y altamente corruptos en el extremo inferior de las clasificaciones de la economía BTI, no hay de hecho un paralelo democrático.

Esto no quiere decir que los países gobernados democráticamente, debido a la competencia relativamente

libre en general por el favor de los votantes, por regla general se esfuerzan por implementar una política socialmente más incluyente. Tampoco debería argumentarse que una base viable para un gobierno democrático surge solo de un cierto nivel de desarrollo económico y social. En muchos casos, es probable que entre en juego una interacción mucho más compleja entre estos dos factores, además de las influencias económicas específicas del país o del mundo. Sin embargo, en el contexto del desempeño en diferentes sistemas políticos, puede afirmarse con cierta certeza que las estructuras de gobierno autoritario, en la abrumadora mayoría de los casos, no contribuyen de manera causal a un desarrollo sostenible del mercado económico y socialmente inclusivo.

Los marcos institucionales se mantienen firmes mientras el desempeño cae en el contexto de los trastornos sociales y económicos de la última década. Llama la atención que, en promedio mundial, ha habido pocos cambios a corto o largo plazo en relación con los marcos regulatorios de la empresa privada y del mercado económico, los sistemas de bienestar o los regímenes de sostenibilidad. Los marcos para la organización del mercado y la competencia han mejorado en general un tanto en todo el mundo gracias a los claros avances con respecto a las reformas del sistema bancario. Es notable cómo los sistemas bancarios de manera integral y sistemática tienen estándares internacionales más fuertemente orientados en las áreas de suficiencia de capital, liquidez, supervisión independiente y requisitos de transparencia. El indicador relevante aquí ha mejorado más marcadamente que cualquier otro aspecto de la transformación económica (+0.58 en relación con el BTI 2008).

Sin embargo, las discrepancias son evidentes con respecto a la organización libre y justa del mercado y los marcos competitivos. Si bien los

sistemas de libre comercio y bancario alcanzan puntajes relativamente altos, las políticas de economía de mercado y antimonopolio son, por el contrario, menos desarrolladas. Por ejemplo, de acuerdo con el BTI 2018, los procedimientos efectivos y estrictos contra monopolios y cárteles (nueve o 10 puntos) funcionan solo en 12 países, mientras que estas protecciones se implementan suficientemente, aunque también de manera desigual (siete u ocho puntos), en 25 países. Por el contrario, en más de la mitad de los países encuestados por el BTI prácticamente no existen reglas que impidan abusos de poder de mercado y fijación de precios y, por lo tanto, salvaguardar la competencia leal, o la implementación de tales reglas es gravemente defectuosa o está conscientemente descuidada.

Dado que los puntajes bajos en el área de política antimonopolio (en promedio 5.35) y particularmente en la política anticorrupción (4.27) a menudo se combinan con altos puntajes para la apertura del mercado interno al mercado mundial (6.89), parece obvio que las élites

en la mayoría de los países solo tienen interés en ciertas estructuras económicas de mercado. La competencia justa tiene tan poco lugar en la agenda del gobierno al igual que el desarrollo económico socialmente inclusivo. En muchos casos, los sistemas económicos de mercado se establecen solo de manera selectiva o con brechas muy conscientemente permitidas, a fin de armonizar más órdenes económicas abiertas con sistemas políticos comparativamente cerrados. Las tendencias opuestas son evidentes también en el área de la regulación de la propiedad privada. Hace una década, los derechos de propiedad estaban mejor protegidos que el papel central de las empresas del sector privado en el marco económico general. Por el contrario, en el BTI 2018, incluso en economías mejor desarrolladas, las oportunidades para la actividad del sector privado se han ampliado, mientras que los derechos de propiedad privada están sujetos a menos protecciones.

Más empresas privadas, menos seguridad jurídica: ¿cómo podemos explicar estas diferentes tendencias?

Por un lado, muchos gobiernos se han vuelto evidentemente más escépticos hacia el sector privado, al que han responsabilizado por las crisis. Reconocen la importancia de la empresa privada, pero se reservan el derecho de participar en intervenciones ad hoc si el desarrollo económico positivo no es lo suficientemente rápido como para manifestarse. Con frecuencia, las políticas dejan al sector privado muy poco tiempo para una adaptación impulsada por el mercado a las condiciones posteriores a la crisis, y en lugar de eso, presentan muy rápido la presencia de fallas del mercado. Por otro lado, el estado de derecho y la protección de los derechos de propiedad están correlacionados en un grado sorprendentemente alto. Esto apunta a la importancia de los procesos de transformación política (por ejemplo, con respecto a la estatalidad y el estado de derecho) y la calidad de la gobernanza (por ejemplo, con respecto a la eficiencia de recursos y la política anticorrupción) para un desarrollo económico de mercado socialmente justo y sostenible.

Transformación económica, BTI 2018

Economías de mercado
desarrolladas

Puntaje 10 a 8

15

República Checa	9.64
Estonia	9.29
Taiwan	9.29
Eslovenia	9.11
Lituania	9.04
Singapur	8.89
Corea del Sur	8.64
Letonia	8.61
Polonia	8.61
Eslovaquia	8.57
Chile	8.54
Uruguay	8.43
Emiratos AU	8.14
Qatar	8.04
Mauricio ▲	8.00

Economías de mercado
funcionales

Puntaje < 8 a 7

11

Rumania	7.96
Costa Rica	7.93
Croacia	7.79
Hungría	7.71
Botswana	7.57
Bulgaria	7.50
Malasia	7.21
Montenegro	7.14
Peru	7.11
Serbia	7.11
Macedonia	7.07

Economías de mercado
con fallas funcionales

Score < 7 to 5

53

Brasil ▼	6.93
Panamá ▼	6.93
Turquía ▼	6.79
China	6.75
Kuwait ▼	6.71
Sri Lanka	6.68
Filipinas	6.64
Albania	6.61
Argentina	6.54
Bosnia Herzegovina	6.46
El Salvador	6.46
Colombia	6.43
México	6.36
India	6.32
Jamaica	6.32
Sudáfrica	6.32
Tailand	6.18
Ucrania	6.18
Jordania	6.07
Rusia	6.07
Armenia	6.04
Georgia	6.04
Paraguay	6.04
Túnez	6.04
Bahrein	6.00
Indonesia	6.00
Kosovo	5.96
Arabia Saudita	5.96
Bhutan	5.93
Rep. Dominicana	5.93
Uganda	5.89
Oman	5.86
Mongolia	5.79
Bolivia	5.71
Moldova	5.71
Rwanda	5.71
Kirguistán	5.64
Bangladesh	5.61
Ghana	5.61
Kazajistán	5.61
Ecuador	5.54
Namibia	5.50
Vietnam	5.46
Líbano	5.43
Marruecos	5.43
Kenia	5.36
Nicaragua	5.36
Senegal	5.25
Argelia	5.21
Honduras	5.21
Bielorrusia ▲	5.11
Guatemala	5.11
Benin	5.00

Economías de mercado
en mal funcionamiento

Puntaje < 5 a 3

37

Costa de Marfil	4.96
Tanzania ▼	4.93
Zambia ▼	4.89
Egipto	4.86
Papua Nueva Guinea	4.86
Azerbaiyán ▼	4.82
Laos	4.79
Lesoto ▼	4.79
Togo	4.71
Madagascar	4.68
Liberia	4.57
Camerún	4.54
Malawi	4.54
Burkina Faso	4.50
Guinea	4.50
Cuba	4.46
Cambodia	4.43
Mali	4.32
Pakistan	4.32
Uzbekistan	4.29
Mauritania	4.21
Burundi	4.14
Mozambique	4.14
Nepal	4.14
Sierra Leona	4.14
Niger	3.96
Iraq	3.89
Nigeria	3.86
Angola	3.68
Etiopía	3.64
Tayikistán	3.64
Rep. Congo	3.50
Turkmenistán	3.43
Iran	3.39
Burma ▲	3.25
Chad	3.18
Venezuela	3.14

Economías de mercado
rudimentarias

Puntaje < 3

13

Rep. Africa Central	2.96
Afganistán	2.89
Haiti ▼	2.89
Zimbabue ▼	2.82
DR Congo	2.79
Libya	2.64
Sudan	2.32
Sudan del Sur	1.93
Corea del Norte	1.71
Yemen ▼	1.64
Eritrea	1.57
Siria	1.39
Somalia	1.25

▲ Movimiento a una categoría superior
(cada flecha señala una categoría)▼ Movimiento a una categoría menor
(cada flecha señala una categoría)

Muy buena



Buena



Moderada



Débil



Fallida



Transformación de la gobernanza

La división cada vez más profunda entre los gobernantes y los gobernados

El aumento de la polarización social y la radicalización extrema, las crisis económicas, la creciente desigualdad social y desarrollos globales cada vez más complejos plantean desafíos totalmente nuevos para la gestión de la transformación de los políticos. Muchos ciudadanos están perdiendo la confianza en sus gobiernos y, al mismo tiempo, expresan un creciente descontento de que las élites políticas y económicas parecen más propensas a causar problemas que a trabajar para resolverlos. Los políticos a menudo han respondido aislándose interna y externamente, buscando salvaguardar su propio poder. Más que nunca, enfrentamos la necesidad urgente de recalibrar la gobernanza y conducir una discusión inclusiva sobre el futuro de la prosperidad, el progreso social y la participación política y económica.

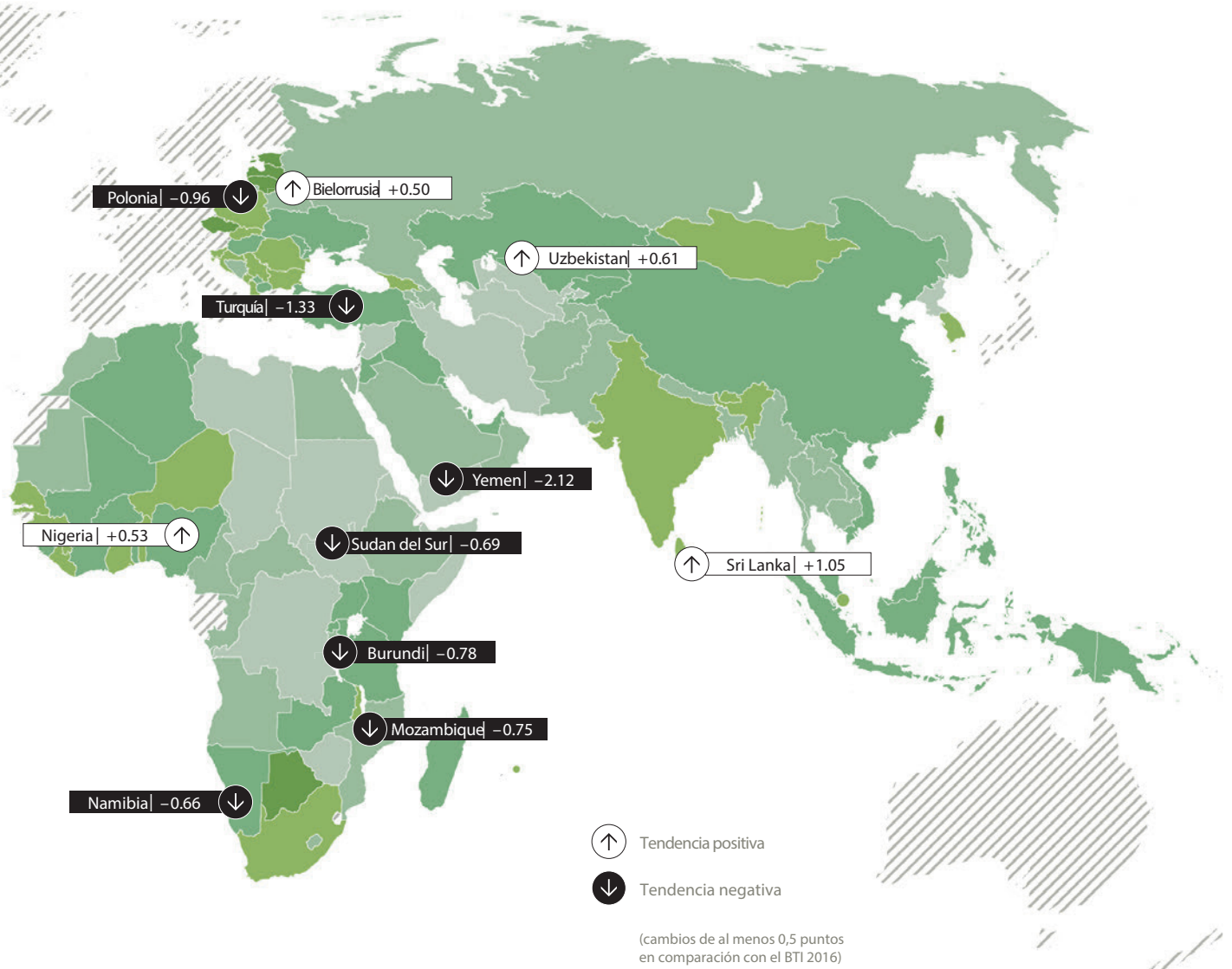
A primera vista, los esfuerzos globales para gestionar el cambio reflejados en los datos de BTI 2018 parecen haber arrojado resultados preocupantes: alrededor de la mitad de los 129 países en transformación y en desarrollo encuestados rindieron peor entre febrero de 2015 y enero de 2017 que dos años antes. Considerando solo cambios de al menos 0,25 puntos, la calidad del gobierno en aproximadamente una cuarta parte de todos los países se encuentra por debajo del nivel alcanzado en

la encuesta BTI 2016, mientras que solo una octava parte de la muestra de países pudo mejorar durante el mismo período. En 4.83 puntos, el promedio del Índice de Gobernanza global para los 118 países que se han evaluado continuamente desde el BTI 2006 cayó a su nivel más bajo en los últimos 12 años.

Al mismo tiempo, los últimos diez años se han definido por los esfuerzos para hacer frente a una de las mayores crisis financieras y económicas mundiales en la historia

reciente, la disminución de los precios de los productos básicos, el aumento de la inestabilidad y el aumento de la fragmentación social. En este contexto, los resultados pueden indicar más resiliencia de lo que podría haberse esperado. De los 39 países que el BTI reconoció que ya mostraban buena o muy buena gobernanza en 2006, 30 -por lo tanto, tres cuartas partes del total- también caen en una de estas dos categorías en el BTI 2018. La calidad de la gobernanza se ha reducido





en dos categorías en un solo país (Mozambique). Nueve gobiernos, incluidos cinco en América Latina (Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay y Perú), dos en el sudeste de Europa (Albania y Serbia) y uno en el sur de Asia (Sri Lanka), han podido mejorar sus puntajes de gobernabilidad moderada desde el BTI 2006.

Lamentablemente, el grupo de estados cuya gobernanza se clasifica como débil o incluso fallida es similarmente estable. Tres cuartas partes de estos países, 31 de 42, están gobernados al mismo nivel (pobre) que hace 12 años. Sin embargo, 11 países han mostrado un desempeño de gobierno significativamente mejor en el BTI 2018, incluidos dos (Guinea y Liberia) que han podido cerrar filas con el grupo líder.

Este pequeño grupo líder de ocho

países ha exhibido una calidad de gobernanza sorprendentemente constante, y cada uno entra en la categoría de gestión de transformación muy buena. Botswana, Chile, Estonia (liderando el Índice de Gobernanza en primer lugar por primera vez) y Taiwán se han sumado continuamente a esta categoría en cada una de las ocho ediciones BTI. Los gobiernos de Lituania y Uruguay también han podido reafirmar repetidamente su alto nivel de desempeño durante muchos años, mientras que la República Checa y Letonia han alcanzado este nivel por primera vez. Como antes, son principalmente países más pequeños los que están demostrando un rendimiento sobresaliente en el gobierno. Entre los 20 países mejor gobernados en el BTI, solo un país, Corea del Sur, tiene

más de 50 millones de residentes.

Sin embargo, el grupo de siete estados que muestran un progreso significativo en la gobernanza de al menos medio punto desde el BTI 2016 incluye a Argentina, uno de los países más grandes de la muestra, y Nigeria, uno de los países más poblados de la muestra. Argentina incluso lidera este grupo con una ganancia de 1.22 puntos. Rompiendo con el estilo de confrontación de la política de Cristina Kirchner después de su elección de 2015, el presidente Mauricio Macri demostró ser exitoso principalmente gracias a las mejoras en la capacidad de dirección de su predecesor y un mayor grado de eficiencia en el uso de los recursos. Estos factores, junto con el enfoque de desarrollo económico más pragmático y orientado a las soluciones del gobierno, también contribuyeron a la mejora de

la credibilidad internacional de Argentina.

El progreso de Ecuador (+0.53 puntos) también se basa en gran medida en un cambio en el área de la cooperación internacional. La profunda crisis económica del país y la pérdida de socios estratégicos como Argentina, Brasil y Venezuela llevaron al presidente Rafael Correa a adoptar un tono más moderado y a ejercer un mayor pragmatismo. La conclusión de un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea resultó ser un hito importante. Aunque a partir de un nivel más modesto, las mejoras en el desempeño de gobierno de Bielorrusia (+0.50) también se atribuyen a factores internacionales. En el curso de su hábil maniobra entre la Unión Europea y Rusia, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko nuevamente se acercó un poco más a Occidente, una movida impulsada en gran parte por preocupaciones económicas. Una disminución parcial de las medidas represivas contra la sociedad civil y la liberación de todos los presos políticos en el otoño de 2015 llevaron a la UE a levantar las sanciones impuestas anteriormente.

El cambio de gobierno está detrás del progreso realizado en Nigeria (+0.51), Sri Lanka (+1.05) y Uzbekistán (+0.61). Por primera vez en la historia de Nigeria, se realizó

una transferencia pacífica del poder a través de las urnas. Particularmente durante su primer año en el cargo, el nuevo presidente Muhammadu Buhari demostró un éxito notable en la lucha contra la milicia terrorista islamista Boko Haram y al mismo tiempo fortaleció la cooperación regional con los estados vecinos en la lucha contra el terrorismo. La fluida transferencia de poder también produjo efectos positivos en la credibilidad del país dentro de la comunidad internacional. Sin embargo, Nigeria sigue lidiando con problemas de gran alcance. El país sigue sumido en su mayor crisis económica en 30 años, y la promesa de la campaña de luchar contra la corrupción endémica del país continúa siendo incumplida.

En Sri Lanka, el presidente Mahinda Rajapaksa sufrió una inesperada derrota electoral. Su sucesor, Maithripala Sirisena, ha tomado algunas medidas para revertir la erosión de las instituciones democráticas y anunció durante la campaña electoral que presionaría más enérgicamente para la reconciliación con la población tamil. Sin embargo, muchas de sus promesas aún no se han cumplido. En Uzbekistán, la muerte del presidente Islam Karimov, que había ocupado el cargo desde la independencia de 1991 en el país, condujo a una transferencia de poder

notablemente pacífica. Dada la naturaleza autocrática de este estado, la introducción del nuevo presidente Shavkat Mirziyoyev de reformas administrativas cautelosas y una tentativa liberalización económica resultó sorprendente.

En los 10 países en los que la gobernanza se ha deteriorado significativamente desde el BTI 2016, también hubo una disminución considerable en la calidad de la democracia. Desde una perspectiva comparativa, el revés político más pequeño ocurrió en Brasil, donde el debilitamiento de las instituciones democráticas estuvo vinculado a una parálisis casi completa del gobierno, y en Namibia, donde los deterioros en el estado de derecho se asociaron con un gobierno incoherente y una ineficiencia administrativa. En todos los demás países dentro de este grupo, el enfoque principal del gobierno en la consolidación o retención del poder llevó en diferentes grados a una mayor erosión de los procesos e instituciones democráticas -hasta el punto de un cambio de régimen autocrático en Mozambique y Nicaragua, y una masiva regresión en los logros democráticos en Polonia y Turquía.

Una alta intensidad de conflicto y polarización social creciente

En Burundi (-0.78 puntos), Sudán del Sur (-0.69) y Yemen (-2.12) una caída

Las demandas sobre la gobernabilidad aumentan debido a la creciente polarización en las sociedades



en el desempeño de la gobernanza ha aparecido en combinación con violencia política, guerra civil o condiciones similares a la guerra civil, por lo tanto complicando aún más la gobernanza futura. Estos tres países ejemplifican una tendencia también documentada por el BTI 2018 como un todo: la intensidad de los conflictos sociales, políticos, étnicos y religiosos está aumentando. Como promedio global en todos los países encuestados continuamente desde el BTI 2006, la intensidad del conflicto ha subido 0,50 puntos, un salto marcado en la escala de 10 puntos y uno de los cambios más fuertes en la evaluación del BTI.

La percepción, particularmente fuerte en Europa, de que los conflictos internos de la sociedad se desarrollan con una violencia cada vez mayor, también está ligada al hecho de que las zonas problemáticas se han acercado significativamente al continente. Por ejemplo, en comparación con 2006, el Medio Oriente y el Norte de África ha demostrado por lejos el mayor aumento en los conflictos armados. La violencia ha aumentado en Libia, Siria y Yemen, alcanzando el nivel constantemente alto de Iraq y Sudán. Además, desde el punto de vista europeo, el conflicto territorial en curso entre Rusia y Ucrania confirma la sensación de inestabilidad creciente. Por el contrario, los países en los que los conflictos se han resuelto con éxito o en los que los niveles de violencia se han contenido de manera significativa se encuentran más allá de la periferia europea. Este último grupo incluye a Côte d'Ivoire, Liberia y Rwanda en el continente africano, así como a Colombia, Nepal y Tayikistán.

Catorce de los países encuestados por el BTI están marcados por condiciones de guerra o guerra civil. Este número apenas se ha movido en la última década. El aumento en la intensidad del conflicto medido por el BTI ha sido conducido en un grado mucho mayor por una mayor

polarización que cae por debajo de este umbral, pero es observable en casi todas las regiones del mundo. En el BTI 2006, las tensiones sociales, étnicas y religiosas se evaluaron como de muy bajo nivel en alrededor del 40% de los países de la muestra. Esta cifra ha caído al 26% en el BTI 2018. Entre los grupos de países con mayor y menor intensidad de conflicto están los 72 países donde las divisiones sociales domésticas se han vuelto significativamente más sobresalientes, incluso si la violencia ha estallado solo esporádicamente, y los actores políticos radicales solo han tenido un éxito limitado en la movilización de grandes porciones de la población a lo largo de estas líneas de conflicto. En lugar de aparecer de repente, los aumentos en la intensidad del conflicto se han producido gradualmente, comenzando desde un nivel relativamente bajo. Sin embargo, hoy en día, ese conflicto está hirviendo con más fuerza que hace 12 años, con divisiones sociales, étnicas y religiosas más visibles. Esto es particularmente cierto para el sur y el este de África, incluso más allá de los países actualmente sumidos en la guerra civil. El mayor aumento en la intensidad de los conflictos se ha producido en países como Burundi, Mozambique, Tanzania y Zimbabue. Sin embargo, incluso las dos regiones con los niveles más bajos de intensidad de conflicto en todo el mundo han quedado atrapadas en esta tendencia, si bien con efectos menos visibles. En casi la mitad de los países de Europa central y sudoriental, las líneas de conflictos sociales son más evidentes hoy que hace una década. También en América Latina, al menos nueve de los 21 países encuestados han mostrado un aumento en esta área, más notoriamente en México y Venezuela, y menos notablemente en Brasil y Honduras.

No hay dudas: la presión sobre los gobiernos y las elites de poder ha aumentado en muchos lugares.

Las razones de esta creciente intensidad de conflicto dentro de las sociedades difieren en su magnitud y características, a veces de manera significativa; sin embargo, hay semejanzas entre los aspectos individuales y las combinaciones de las divisiones sociales cada vez más profundas. Los conflictos más fuertemente marcados por la violencia (como los del Noerte de África y el mundo árabe) a menudo asumen su creciente carga étnica, social o religiosa en el contexto del terrorismo fundamentalista y las luchas por los recursos, generalmente en combinación con una debilidad estatal y a menudo con una larga historia de enfrentamientos violentos. En los estados en los que la violencia aún no se ha intensificado hasta el punto de una guerra civil, las luchas de poder internas entre las élites políticas junto con las crisis económicas y la disminución de los recursos a menudo exacerban las líneas de conflicto preexistentes. En los últimos años, la larga persistencia de dificultades económicas, que en muchos estados han llevado a recortes severos, también ha profundizado las divisiones socioeconómicas entre grupos de población. La falta de respuesta de los gobiernos a las expectativas de sus ciudadanos, así como la mala gestión, la corrupción desenfadada y el clientelismo han provocado en muchos países una profunda frustración con el liderazgo político establecido e incluso una crisis de confianza, con la creciente polarización que se manifiesta en las nuevas o viejas líneas de conflicto.

Las elites de poder a menudo exacerban los conflictos

Las respuestas de los responsables políticos a los desafíos planteados por una mayor propensión a la violencia y los conflictos agravados en la sociedad hasta la fecha han sido totalmente inadecuadas. Lograr una gobernanza eficiente y orientada a

largo plazo requeriría urgentemente una mayor inclusión, un proceso de creación de consenso centrado en la acomodación y una mayor capacidad de respuesta por parte de las élites políticas. Sin embargo, los hallazgos del BTI 2018 indican que la mayoría de los gobiernos no han intensificado suficientemente sus esfuerzos en estas áreas. De hecho, a menudo sucede lo contrario. Las puntuaciones para la creación de consenso y la cooperación internacional, los dos criterios BTI que evalúan la disposición y la capacidad de los gobiernos para expandir la inclusión y el diálogo, han disminuido como promedio mundial desde el BTI 2006. En lugar de aumentar el diálogo para moderar puntos de vista antagónicos, muchos gobiernos que enfrentan el creciente conflicto parecen estar eligiendo un enfoque de aislamiento interno y externo.

Esto es más evidente en la evaluación de la capacidad de los actores políticos para participar en la gestión efectiva de conflictos. Ningún otro aspecto de la gobernanza ha visto disminuciones tan significativas en la calidad en los últimos 12 años (-0.61 puntos). En 57 de los países encuestados continuamente desde el BTI 2006 -casi la mitad de la muestra- los gobiernos son hoy menos capaces o menos dispuestos a moderar conflictos sociales. En ninguna región es esta tendencia negativa tan pronunciada como en el Medio Oriente y el Norte de África, donde el nivel promedio de intensidad de conflicto ya es el más alto del mundo, y así se perpetúa una espiral de violencia. La capacidad o disposición promedio de los gobiernos para moderar conflictos en la región ha disminuido en 2,63 puntos desde mediados de la década del 2000. Además, ninguna otra región tiene proporcionalmente tantos gobiernos que no solo no contribuyen a resolver conflictos sociales, sino que incluso impulsan

deliberadamente su escalada. En nueve de los 16 países, las élites de poder aparentemente tienen interés en profundizar las divisiones sociales o mantener abiertas las trincheras existentes. Esto es cierto no solo en Bahréin, cuya pérdida de seis puntos representa la mayor disminución en todo el mundo desde el BTI 2006, y donde los ataques brutales contra la población mayoritaria chií no han disminuido durante el actual período de revisión. Sin embargo, los regímenes de Libia y Siria también han seguido intensificando la violencia. En países como Egipto y Arabia Saudita, donde los conflictos internos de la sociedad también se han intensificado de manera significativa, los gobiernos tampoco han mostrado interés en acomodar fuerzas opuestas, en lugar de renovar su enfoque en la polarización como una estrategia para retener poder.

Durante el período actual del BTI, el gobierno de Turquía siguió esta estrategia de manera particularmente obvia. El presidente Recep Tayyip Erdoğan ha adoptado un estilo de gobierno polarizante y de confrontación hacia los activistas y supuestos simpatizantes del movimiento Gülen que, tras el intento de golpe, fue declarado recientemente como enemigo estatal de los “intereses nacionales” definidos por el régimen (junto con el PKK, que también se considera una organización terrorista). Esto ha servido para movilizar y adoctrinar a los propios partidarios del partido del gobierno, al tiempo que se excluyen todos los rivales políticos. En Burundi, que en comparación con el BTI 2016 también ha perdido tres puntos en el área de manejo de conflictos, la polémica candidatura del presidente Pierre Nkurunziza para un tercer mandato extraconstitucional en el cargo provocó feroces protestas. En la confrontación subsiguiente, el presidente se centró deliberadamente en la dimensión étnicamente cargada del conflicto y mantuvo este curso

incluso después de su victoria electoral. Como señala el informe del país, esto es aún más trágico dado que en los últimos años, el tema de las diferencias étnicas ha jugado un papel cada vez menos dominante en el discurso político. Esto se consideró un éxito para un sistema político estructurado deliberadamente para acomodar las diferencias étnicas tras el final de la guerra civil en 2005. Sin embargo, el informe de BTI también señaló críticamente que los conflictos socioeconómicos y políticos que subyacen a la dimensión étnica (incluidos los enormes contrastes entre una población urbana y un estrato relativamente acomodado y una población rural empobrecida, y la concentración del poder en manos de una pequeña elite que fomenta el clientelismo y la corrupción) nunca se había abordado con seriedad.

En general, la situación en el África subsahariana es solo un poco mejor que en Medio Oriente y África del Norte. La disposición y la capacidad de los gobiernos para moderar los conflictos sociales ha disminuido en 21 de los 38 países encuestados allí desde mediados de la década de 2000, y las pérdidas más importantes se registran en Eritrea y Mali. Sin embargo, la magnitud del deterioro varía considerablemente entre las subregiones africanas. En los países del África occidental, la capacidad de aliviar las tensiones sociales ha disminuido menos que en muchos países del sur y este de África a pesar de un alto nivel de intensidad de conflicto y desafíos intensificados significativamente debido en parte al extremismo religioso cada vez más agresivo. Mientras numerosos gobiernos en el sur y este de África todavía seguían una política proactiva de desescalación y buscaban el consenso entre varios grupos en 2006, la gestión de conflictos en países como Kenia, Madagascar, Namibia, Tanzania e incluso Sudáfrica es hoy en día significativamente menos exitosa.

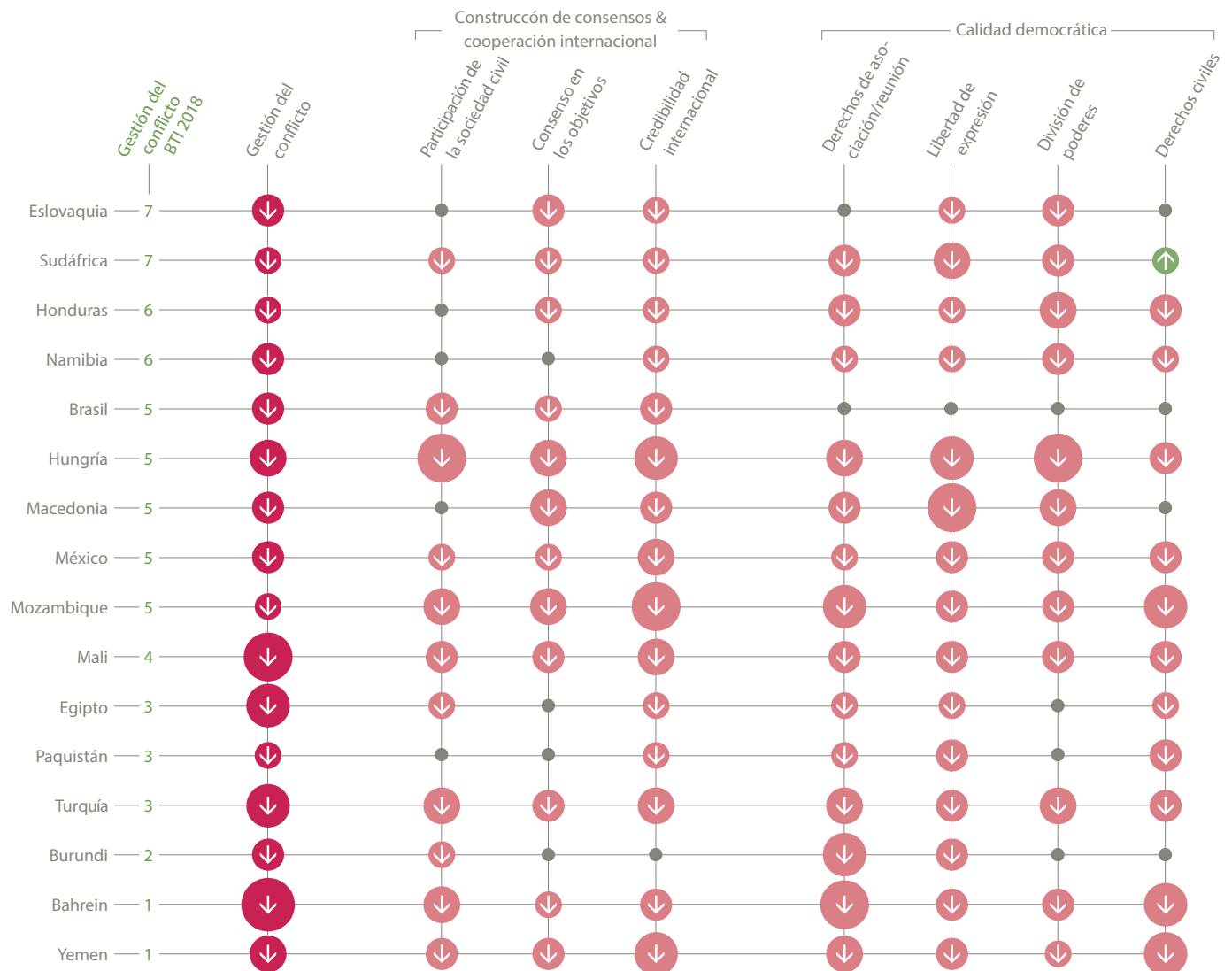
Los esfuerzos o capacidades decrecientes entre los gobiernos para involucrarse en la gestión efectiva de conflictos son aún más evidentes en las dos regiones que continúan exhibiendo el mejor desempeño promedio de gobernabilidad. En América Latina y Europa oriental-central y sudoriental, no se considera que la mayoría de los actores políticos contribuyan de manera sistemática y activa a la escalada de conflictos sociales existentes, excepto en Bosnia-Herzegovina y, en mayor medida, en Venezuela. Sin embargo, el clima se ha vuelto considerablemente más severo en los últimos años, y los estilos políticos en muchos países se han vuelto más conflictivos. En ambas regiones, los

gobiernos enfrentan el desafío de amortiguar la creciente segmentación social que se ha desencadenado en gran parte por las transformaciones de las últimas décadas. Esto a su vez tiene lugar en el contexto de los problemas económicos que han persistido desde la crisis financiera y económica mundial, aumentando la frustración dentro de cada estrato de la población que se ve atrasada en los cambios desde el comienzo de los procesos de transformación en la década de 1990, y la creciente demanda de inversión en áreas tales como educación, cuidado de la salud, seguridad interna y justicia social. El impulso de los ciudadanos de hacer que sus gobiernos sean más responsables y de poner fin a la

tolerancia por la continua corrupción y el clientelismo se ha expresado en protestas contra el establishment político.

Actualmente, el BTI da fe del hecho de que los gobiernos de América Latina tienen más éxito en lidiar con estos conflictos. En 6.19 puntos, el puntaje promedio para este indicador se mantiene exactamente en el mismo nivel que en el BTI 2006. Las disminuciones han sido más fuertes en Brasil y México (cada uno registra pérdidas de dos puntos). En Brasil, las luchas internas persistentes han exacerbado la polarización, y la lucha ahora fuertemente politizada contra la corrupción sistemática ha arrasado amplias franjas de la élite política. Al

Las fallas de gestionar eficientemente el conflicto por lo general van de la mano con caídas en construcción de consensos, credibilidad internacional y calidad de la democracia



Cambios en el puntaje en indicadores clave de gobernabilidad y transformación política, BTI 2006–BTI 2018

mismo tiempo, las estrictas medidas de austeridad amenazan con hacer retroceder los logros sociales de la última década. Debido a la crisis económica y al estado precario de la seguridad interna, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha tenido cada vez menos éxito en la moderación del descontento de los grupos con el sistema político y el modelo económico imperante. Sin embargo, aunque cinco países muestran una menor capacidad y disposición para participar en la gestión de conflictos que en 2006, las mejoras son evidentes en ocho países. Este último grupo incluye a Cuba, donde Raúl Castro ha demostrado ser más exitoso que su hermano en construir puentes con comunidades de fe como la Iglesia Católica y más recientemente Argentina, donde Mauricio Macri ha buscado reemplazar el estilo de liderazgo confrontativo de su predecesora con más diálogo y la formación de nuevas coaliciones.

En Europa del Este, Centro y Sudeste, el puntaje regional promedio para la gestión de conflictos es incluso algo mayor, con 6.87 puntos. Sin embargo, dado un deterioro de 0.60 puntos desde el BTI 2006, la brecha entre las dos regiones se ha reducido significativamente. Numerosos gobiernos están actuando de una manera claramente más conflictiva y menos incluyentes que a mediados de la década de 2000. Esto se debe en gran parte a que las crisis europeas y los procesos internos de estratificación social han ofrecido oportunidades de movilización a numerosos y nuevos partidos y movimientos que se presentan como alternativas a las élites políticas establecidas, desacreditadas por abundantes casos de corrupción. Los partidos nacionalistas populistas y de derecha se han convertido en defensores de los grupos en la sociedad que han sido desacoplados de la europeización y han utilizado esto

como una plataforma para ingresar a los parlamentos. En los concursos con los partidos establecidos que han asumido sus argumentos populistas y estrategias de movilización, han contribuido a un tono más duro en el discurso político y a la polarización de la competencia política en varios países de la región.

Sin embargo, es el gobierno húngaro el que se ha retirado más claramente de los esfuerzos para participar en la moderación (-3 puntos). El gobierno de Fidesz ha logrado reinterpretar los conflictos basados en intereses en términos basados en la identidad, y al hacerlo ha movilizó apoyo para su propio rumbo y ha excluido a los opositores políticos. En este sentido, el gobierno ha utilizado una narrativa nacionalista y euroescéptica, explotando así las ansiedades generalizadas con respecto a los inmigrantes musulmanes que han crecido en particular desde la crisis de refugiados de la UE. El partido nacionalista-conservador PiS de Polonia ha seguido una estrategia similar desde su victoria electoral en el otoño de 2015, al igual que el gobierno eslovaco. En Macedonia, la polarización de la contienda política entre el gobierno y la oposición se ha acentuado adicionalmente por una dimensión etnopolítica.

Aislamiento interno y externo

La capacidad decreciente y la voluntad de los gobiernos de participar en moderación y diálogo en Hungría, Macedonia y Polonia ilustran vívidamente tres tendencias descendentes correspondientes en otros aspectos de la transformación que son evidentes en prácticamente todos los estados donde los esfuerzos de gestión de conflictos han disminuido en los últimos 12 años.

En primer lugar, como regla general, todos los indicadores de creación de consenso tienden a

incorporarse en la tendencia negativa de gestión de conflictos. Donde aumenta la incapacidad o falta de inclinación a conflictos moderados, el consenso de los actores políticos sobre los objetivos de transformación también se erosiona, la sociedad civil se incluye con menos frecuencia en los procesos de toma de decisiones políticas, y la influencia de los actores antidemocráticos aumenta.

Por ejemplo, la ambigüedad con respecto a los objetivos y las prioridades de los procesos de transformación no ha aumentado en ninguna parte tan fuertemente como en el este de Europa central y sudoriental. El puntaje regional promedio para el consenso entre los actores ha disminuido en 0,35 puntos desde el BTI 2016, mientras que el puntaje de la capacidad del liderazgo o la voluntad de reducir la influencia antidemocrática ha caído en un total de 0,41 puntos. Sin duda, esto no significa que los dos conceptos rectores de la democracia y una economía de mercado sean cuestionados en un sentido fundamental. A pesar de las tendencias regresivas, solo Macedonia ha caído hasta ahora en una puntuación de siete puntos, un nivel que presupone un acuerdo general con respecto a los objetivos de transformación. Sin embargo, el desacuerdo con respecto a las estrategias para alcanzar estos objetivos está creciendo en Hungría, Macedonia y Eslovaquia, pero recientemente también entre los líderes en Polonia. Los gobiernos de estos países están aplicando políticas centradas en la consolidación de su poder y tienden a considerar que cualquier oposición es contraria a sus objetivos. Esta tendencia compromete cada vez más los cimientos de las instituciones democráticas creadas después de 1989.

En segundo lugar, las menguantes capacidades de gestión de conflictos

a menudo van acompañadas de restricciones en la participación política y el estado de derecho. Los gobiernos que restringen las libertades de expresión, reunión y prensa y socavan la separación de poderes -particularmente a través de ataques contra la independencia del sistema judicial- se protegen de las críticas no deseadas de la oposición. Además, a medida que el espacio asignado al compromiso de la sociedad civil se reduce, su participación en el proceso político disminuye en consecuencia. Esta observación también se aplica en el caso inverso: una mejora en las capacidades de gestión de conflictos casi siempre conlleva una mayor participación política y el fortalecimiento de los principios e instituciones basados en el estado de derecho, como se evidencia en los ejemplos de Colombia, Liberia y Túnez.

Tercero, los gobiernos no solo se aíslan cada vez más internamente, sino también externamente. Como promedio global, el criterio de la cooperación internacional sigue siendo el aspecto más valorado de la gobernanza a cierta distancia, con un puntaje de 6.60 puntos. Sin embargo, con una pérdida de 0.22 puntos en los últimos 12 años, ha mostrado los descensos más fuertes de los cuatro criterios del Índice de Gobierno. África occidental y central representa una excepción regional positiva. Los países aquí han utilizado el apoyo internacional de manera relativamente efectiva para sus propias agendas de desarrollo y la lucha contra el islamismo militante, y además se han beneficiado de una cooperación regional más fuerte. Sin embargo, el indicador de credibilidad es el principal responsable de las disminuciones globales; de hecho, casi la mitad de todos los países encuestados por el BTI han perdido terreno aquí en los últimos 12 años. En la actualidad, se considera que 59 países son socios menos fiables que

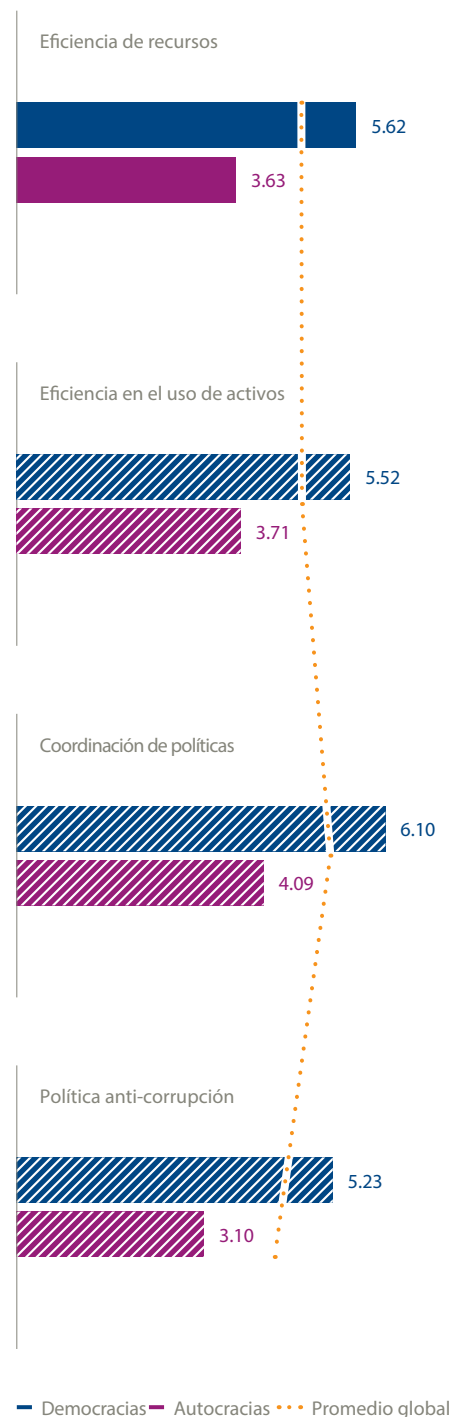
antes y participan menos activamente en iniciativas multilaterales e internacionales, mientras que solo 30 gobiernos han podido mejorar su posición internacional.

La mayor caída en los puntajes ha sido experimentada por el antiguo país modelo Mozambique y el Tayikistán centroasiático, cada uno mostrando una disminución de cinco puntos. Ambos países han perdido el favor de la comunidad internacional debido a la corrupción asociada con las opacas transacciones de crédito. En Tayikistán, el régimen también ha reprimido a opositores políticos y ha sido acusado de graves violaciones de los derechos humanos. Otros estados con puntajes en picada incluyen Hungría (-4), México, Rusia, Turquía (todos -3), Brasil, Kenia (-2), Filipinas y Sudáfrica (-1); dentro de este grupo, una disminución de la participación en las relaciones internacionales ha ido acompañada de una creciente renuencia a acomodar los intereses de la sociedad nacional, junto con pasos hacia atrás con respecto a la participación política y el estado de derecho. De particular importancia es el hecho de que precisamente en un momento en que el aumento de la interconexión y la complejidad cada vez mayor de los problemas globales está haciendo necesaria una cooperación internacional intensificada, la capacidad de los gobiernos estatales influyentes para asumir un papel pacífico y confiable en este proceso se está debilitando.

La atracción del liderazgo populista-autoritario: ¿los hombres fuertes gobiernan mejor?

Desde Erdoğan y Duterte hasta Orbán y Kaczynski, son sobre todo los llamados hombres fuertes que actualmente están en los titulares con sus estilos de liderazgo populista-autoritario, políticas internas de línea dura y enérgicas apariencias externas. Estas figuras hacen poco

La brecha de eficiencia entre democracias y autocracias



para acomodar intereses o desarrollar consenso entre una amplia base de partes interesadas; más bien, agotan sistemáticamente los recursos de una esfera pública crítica y desacreditan los procesos e instituciones democráticos, en la medida en que todavía existen. Afirman ser capaces de definir e implementar la voluntad popular y declarar a los opositores políticos como enemigos del Estado. Dadas las turbulentas condiciones mundiales, el control del destino de

sus países, aparentemente ejercido por gobernantes autocráticos establecidos como Vladimir Putin o Xi Jinping, sin obstáculos por conflictos sociales internos complejos que podrían interferir con una mano fuerte o la retención de poder, parece ejercer una cierta atracción, tanto para los políticos como para los votantes. En muchos países, la mala administración, el clientelismo, la falta de capacidad de respuesta y la falta de servicios han desacreditado de manera integral el establecimiento político y económico a los ojos de la población, a la vez que amplían las dudas sobre el funcionamiento de la política. Muchos partidos y movimientos políticos han explotado esta crisis de confianza, estableciéndose firmemente en una retórica antiestablishment que promete expulsar a las elites corruptas, que solo se enriquecen a sí mismas, y cumplir mejor los deseos y las necesidades de los ciudadanos.

Pero, ¿los “hombres fuertes” logran implementar sus reclamos más grandiosos y gobiernan mejor en interés de los ciudadanos? Con su capacidad y sus criterios de eficiencia de recursos, el BTI analiza precisamente las cualidades de gobernanza asociadas con la implementación efectiva de las reformas y el uso de los recursos existentes para obtener el mayor impacto. Por lo tanto, estos criterios examinan los procesos internos involucrados en el establecimiento de prioridades a largo plazo para enfocarse en la democracia y el desarrollo económico inclusivo. Además, evalúan la coherencia de la implementación de políticas, la eficiencia con la que se utilizan los recursos presupuestarios y las capacidades administrativas, la calidad de los esfuerzos para combatir la corrupción en todos los niveles y la flexibilidad y adaptabilidad de los legisladores frente a las condiciones cambiantes o cuando las reformas fracasan.

Hasta la fecha, los hallazgos del BTI en esta área no apuntan claramente a favor de los “hombres fuertes”; de hecho, los resultados a veces son incluso devastadores respecto a esto. Por ejemplo, a pesar de tener una mayoría sólida en el parlamento y contar con un amplio apoyo en al menos una parte de la población, el gobierno húngaro ha mostrado una mayor capacidad de conducción y disminución de la eficiencia de recursos que cualquier otro país encuestado por el BTI en comparación con hace 12 años. Sin duda, el BTI da fe de la gran habilidad política del partido de Fidesz para consolidar el poder; sin embargo, esto ha sido a costa de la claridad conceptual y la calidad de la planificación y la implementación. Los objetivos a largo plazo y la planificación estratégica más allá del objetivo de la retención de energía han sido ampliamente descuidados. Además, la centralización de los procesos de toma de decisiones dentro de los círculos gubernamentales limitados y la creciente falta de transparencia en la gobernanza, particularmente con respecto a la asignación de fondos públicos, han conducido a aumentos graves en la corrupción y el clientelismo.

Mientras que la mayor disminución de puntajes de Hungría tuvo lugar predominantemente en el BTI 2012, es el gobierno turco el que muestra los mayores retrocesos en las áreas de capacidad de conducción (-1.3 puntos) y eficiencia de recursos (-1.7 puntos) en el actual BTI. Los métodos aquí se parecen a los utilizados en Hungría. Al menos desde las elecciones parlamentarias de 2015, y aún más después del intento de golpe de 2016, el gobierno del AKP bajo Erdoğan ha subordinado todos los demás objetivos al objetivo estratégico de la consolidación del poder y la realización exitosa del referéndum. La implementación de reformas importantes se ha retrasado

y se ha abandonado el procesamiento posterior de los miembros del AKP sospechosos de corrupción con la sugerencia de que las acusaciones eran, en cualquier caso, parte de una conspiración del movimiento Gülen.

En Polonia (que todavía estaba entre los cinco primeros países en el Índice de Gobernanza del BTI 2016) y en Filipinas, la creación de consenso y la cooperación internacional han disminuido de manera más significativa que la capacidad de dirección o la eficiencia de los recursos desde el cambio de gobierno. En los primeros meses después de asumir el cargo, tanto el gobierno del PiS en Polonia como el presidente Rodrigo Duterte en Filipinas dieron pasos amplios para implementar sus promesas electorales. En Polonia, esto significó el abandono de estrictas políticas de austeridad en favor de las transferencias sociales, especialmente para los pensionistas y las familias, y en Filipinas, mayores esfuerzos para combatir la corrupción. Sin embargo, el hecho de que las reformas polacas fueron relativamente caóticas y se llevaron a cabo sin un verdadero debate parlamentario indica que la creciente concentración de poder en el gobierno y la implementación fuera de las instituciones democráticas establecidas podrían erosionar la calidad de la capacidad de dirección en el mediano plazo. En Filipinas, los primeros meses del estilo de gobierno errático de Duterte, según lo evaluado en el informe de países BTI, ya han tenido un impacto particularmente negativo en la creación de consenso y cooperación regional. Además, la guerra contra las drogas, con sus numerosas ejecuciones extrajudiciales y la multiplicidad de actores prácticamente incontrolables, amenaza con minar aún más el ya de por sí débil monopolio estatal sobre el uso de la fuerza.

En estos casos, al menos, el BTI no da una indicación clara de que un estilo de gobierno fuertemente

polarizador y populista autoritario conduzca necesariamente a una mayor eficiencia y mayor capacidad de dirección. Además, las mayores ganancias en estos criterios se encuentran principalmente en países que se han centrado en expandir la inclusión y el diálogo con el objetivo de moderar el conflicto. Esto es particularmente cierto de los nuevos gobiernos en Argentina y Sri Lanka. También es notable que los gobiernos de Colombia y Guinea se hayan aferrado a la implementación de sus objetivos de reforma a largo plazo a pesar de todas las dificultades.

Tanto en el caso de la eficiencia de los recursos como de la capacidad de dirección, una tendencia ya insinuada en el BTI 2016 ha continuado. Sin duda, los dos criterios continúan recibiendo los puntajes promedio globales más bajos entre todos los criterios del Índice de Gobernanza. Sin embargo, a diferencia de los criterios de creación de consenso y cooperación internacional, una tendencia ligeramente positiva a medio y largo plazo es evidente aquí, con ambos puntajes ahora más altos que los registrados en el BTI 2006. Sin embargo, esta tendencia no ha continuado en el corto plazo; como en la edición anterior del BTI, estos puntajes han retrocedido ligeramente en la encuesta actual. Particularmente en África meridional y oriental, los logros a largo plazo de los gobiernos se están derritiendo con un descenso particularmente drástico de -0.50 puntos en el área de la capacidad de priorización. Las tendencias de la eficiencia de los recursos pueden arrojar una luz particular sobre la creciente brecha entre los gobernantes y los gobernados. Casi ningún aspecto de la gobernanza es tan unánimemente exigido por las poblaciones de todo el mundo como la lucha contra la corrupción desenfrenada y el despilfarro de fondos públicos en beneficio de las elites gobernantes. Y casi ningún partido o candidato

presidencial falla en hacer de esto un punto central en sus campañas electorales o programas de gobierno. Sin embargo, los resultados del BTI subrayan la continua urgencia de este problema y la falta de respuesta por parte de muchos gobiernos. De hecho, el uso eficiente de los activos y la política anticorrupción, con puntuaciones respectivas de 4,71 y 4,27 puntos, siguen siendo los aspectos de la gobernanza que reciben las peores evaluaciones. Un total de 91 de 129 gobiernos no implementan los recursos públicos administrativos y presupuestarios de manera eficiente o lo hacen en un grado muy limitado (cinco puntos o menos). Y concretamente 103 estados son capaces o están dispuestos a combatir con éxito la corrupción solo en una medida muy limitada.

En ambas áreas, los países gobernados democráticamente funcionan mucho mejor que las autocracias, particularmente con respecto a la lucha contra la corrupción (con promedios respectivos de 5.23 contra 3.10 puntos). La mejora de 0,24 puntos en el promedio mundial del indicador en comparación con el BTI 2006 se debe enteramente al progreso proporcionalmente mayor realizado por las democracias. Un total de 31 estados democráticos hoy luchan contra la corrupción mejor que hace 12 años. Esto incluye países como Côte d'Ivoire, Liberia y Paraguay. Aquí, incluso si la corrupción sigue siendo generalizada, los esfuerzos del gobierno al menos han llevado a la creación de mecanismos de integridad como agencias anticorrupción u oficinas de auditoría pública, así como la exposición y el enjuiciamiento de los casos de corrupción.

Las demandas populares para una lucha contra la corrupción también se han adoptado en numerosos países de Europa oriental-central y sudoriental, incluidas República

Checa, Estonia, Lituania y Rumania. Sin embargo, el ejemplo rumano también muestra el dilema que puede englobar a los gobiernos y políticos cuando hay una campaña independiente y exitosa contra la corrupción. Aquí, después de que numerosos políticos de alto nivel fueran condenados por abuso de poder y corrupción, el gobierno ideó medidas integrales dirigidas a reducir las competencias de lucha contra la corrupción del fiscal y contempló una amnistía para los condenados. Solo después de semanas de protestas populares, el gobierno retiró un relajamiento de las leyes anticorrupción que ya habían sido aprobadas por el parlamento. El presidente Klaus Johannis además se negó a firmar la ley. Sin embargo, el conflicto sobre la reforma planificada continúa, y el nuevo gobierno rumano se aferra a la propuesta. A finales de 2016 y principios de 2017, esto dio lugar a las mayores manifestaciones en Rumania desde el comienzo del proceso de transformación en 1989.

También en otros estados, los constantes esfuerzos anticorrupción han conducido a crisis políticas e intentos de revertir políticas anticorrupción exitosas, porque las élites de los países se han enredado en nexos de mecenazgo, abuso de poder y corrupción. En Brasil, el gobierno del presidente Michel Temer otorga baja prioridad a la lucha anticorrupción siempre que implique denuncias contra quienes pertenecen a la propia administración, pero instrumentaliza el tema contra los opositores políticos. En la República Checa, después del período de la encuesta BTI 2018, el parlamento adoptó una ley dirigida a los conflictos de interés entre los políticos que estaba dirigida principalmente al multimillonario ex ministro de finanzas Andrej Babis, quien era dueño de dos de las mayores compañías mediáticas checas mientras ocupaba el cargo. Desde

ese momento, Babis se convirtió en el primer ministro del país y luchó por suspender la independencia del ministerio público y la agencia anticorrupción.

La lucha contra la corrupción exigida por los ciudadanos a menudo coloca a los titulares de cargos corruptos en un dilema: si la campaña es exitosa y verdaderamente independiente de la interferencia política, también podría entrar en sus propias filas. En este sentido, los gobiernos autocráticos actúan en un entorno diferente, porque saben cómo reprimir el descontento de la población a través de medidas represivas y, en consecuencia, tienen poco que temer de los medios de comunicación independientes o de los guardianes de la sociedad civil. La mayoría de los autócratas hacen poco para combatir la corrupción y el abuso en la oficina más allá de pagar el servicio verbal. De hecho, la asignación de oficinas y contratos públicos asegura un apoyo fundamental para la retención del poder. El BTI reconoce esfuerzos algo serios en el área de la política anticorrupción, es decir, con un puntaje de más de cinco puntos, en solo cuatro de las 58 autocracias. Mientras que Qatar, Ruanda (ambos puntos) y los Emiratos Árabes Unidos (siete puntos) están en este grupo, Singapur se destaca como

la mayor excepción, logrando una puntuación de nueve puntos junto a Bhután, Chile, Estonia, Taiwán y Uruguay. Sin embargo, la gran mayoría de las autocracias no son sistemas eficientes y profesionales; como regla general, se caracterizan por la corrupción, la cleptocracia y el gobierno arbitrario que no ofrece una alternativa genuinamente convincente a un desarrollo económico y social sostenible que prometa a todos los ciudadanos una mayor participación. A lo largo de todas las discusiones actuales sobre la superioridad normativa o empírica de uno u otro modelo, el deseo de ser gobernado de manera justa es universal.

Gobernanza sostenible: la brecha entre la ambición y la realidad

En la mayoría de los países, la insatisfacción popular con el status quo claramente no ha llevado a una gobernanza más inclusiva. En la actualidad, muchos gobiernos parecen estar siguiendo una estrategia basada en la consolidación del poder interno y la represión de voces opuestas críticas, a veces violentamente, incluso si esto intensifica aún más los conflictos y amplía la brecha entre los gobernantes y los gobernados. Al menos en el corto a mediano plazo,

esto permite a los gobiernos retener el poder y servir a su clientela. Sin embargo, esta política también cubre las quejas económicas y sociales; si se quieren superar a largo plazo, será indispensable un estilo de gobierno más inclusivo y receptivo. En muchas sociedades, esto también requeriría la negociación de un nuevo contrato social con respecto a los objetivos a largo plazo, junto con una revisión concomitante de los sistemas políticos y económicos para determinar si aún pueden cumplir las promesas de participación y proporcionar una distribución equitativa de recursos.

Con la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, la comunidad mundial acordó un conjunto de principios rectores que recogen esta afirmación. Por primera vez, este proyecto contiene no solo los resultados, sino también visiones de cómo debería ser el liderazgo del gobierno y, por lo tanto, los procesos para implementar los objetivos. El debate sobre cómo los estados pueden cumplir con la demanda de instituciones pacíficas, receptivas, responsables e inclusivas probablemente moldeará el debate sobre la gobernanza sostenible en las próximas décadas.

Gobernabilidad, BTI 2018

Muy buena

Puntaje 10 a 7

8

Estonia	7.44
Uruguay	7.36
Chile	7.33
Taiwán	7.33
Lituania	7.18
Botswana	7.09
Rep. Checa ▲	7.03
Letonia ▲	7.00

Buena

Puntaje < 7 a 5.6

35

Costa Rica	6.85
Eslovenia	6.78
Senegal	6.70
Eslovakia	6.70
Mauricio	6.64
El Salvador	6.57
Corea del Sur	6.51
Butan	6.50
Montenegro	6.49
Polonia ▼	6.25
Ghana	6.18
Colombia	6.14
Croacia	6.07
Serbia	6.06
Paraguay	6.04
Albania	6.02
India	6.02
Argentina ▲	6.00
Bulgaria	5.98
Mongolia	5.96
Sudáfrica	5.96
Brasil	5.95
Singapur	5.95
Rumania	5.89
Georgia	5.87
Niger	5.87
Benin ▲	5.86
Jamaica	5.86
Liberia	5.84
Guinea	5.82
Perú ▲	5.81
Panamá	5.72
Bolivia	5.66
Malawi	5.61
Sri Lanka ▲	5.60

Moderada

Puntaje < 5.6 a 4.3

39

Rep. Dominicana ▼	5.57
Emiratos AU	5.55
Costa de Marfil	5.54
Namibia ▼	5.49
Indonesia	5.45
Ucrania	5.41
Qatar	5.40
Tunisia	5.33
Uganda ▼	5.31
Macedonia ▼	5.24
Burkina Faso	5.20
Malasia	5.20
Rwanda	5.20
Kosovo	5.17
Mali	5.17
México	5.17
Moldavia	5.15
Madagascar	5.12
Togo	5.10
Tanzania	5.07
Zambia	5.06
Ecuador	4.99
Honduras	4.98
Sierra Leona	4.93
Kenia	4.92
Filipinas	4.90
Jordania	4.84
China	4.79
Nueva Guina Papua	4.78
Kirguistán	4.73
Turquía ▼	4.72
Nigeria ▲	4.59
Argelia	4.55
Guatemala	4.52
Vietnam	4.51
Hungary	4.44
Iraq ▲	4.43
Kazajistán ▲	4.41
Kuwait ▲	4.37

Débil

Puntaje < 4.3 a 3

32

Marruecos ▼	4.28
Bangladesh ▼	4.27
Armenia ▼	4.25
Mozambique ▼	4.25
Nicaragua ▼	4.22
Rep. Africa Central	4.10
Bosnia Herzegovina	4.09
Mauritania	4.06
Afganistan	4.02
Burma	3.97
Egipto ▼	3.96
Cuba	3.93
Laos	3.89
Tailandia	3.89
Azerbaiyán	3.86
Arabia Saudita	3.80
Nepal	3.74
Etiopia	3.65
Angola	3.60
Líbano	3.60
Lesoto	3.59
Oman	3.54
Bahrein	3.52
Bielorrusia	3.52
Rusia	3.52
Paquistán	3.51
Camerún	3.46
Haití	3.39
Tayiquistán	3.31
Burundi	3.29
Camboya	3.23
Rep. Congo	3.00

Fallida

Puntaje < 3

15

Iran	2.85
Chad	2.84
Uzbequistán	2.55
Turkmenistan	2.51
DR Congo	2.47
Zimbabwe	2.37
Sudán del Sur	2.30
Libia	2.29
Somalia	2.25
Sudan	1.97
Venezuela	1.86
Yemen ▼	1.70
Corea del Norte	1.30
Eritrea	1.13
Siria	1.13

- ▲ Movimiento a una categoría superior (cada flecha indica una categoría)
- ▼ Movimiento a una categoría inferior (cada flecha indica una categoría)